

Tipo de documento: Working Paper N°62

ISSN: 0327-9588



La dirigencia argentina y el proceso de reformas económicas de los 90: análisis de los resultados de una encuesta de líderes

Autoría: Gervasoni, Carlos

Fecha de publicación: Abril 2001

La serie Working Papers de la Universidad Torcuato Di Tella consta de 63 documentos científicos publicados entre 1993 y 2001, cuyas autorías corresponden a prestigiosos y prestigiosas referentes de las Ciencias Sociales. La colección completa, puede consultarse [aquí](#).

¿Cómo citar este trabajo?

Gervasoni, C. (2001). *La dirigencia argentina y el proceso de reformas económicas de los 90: análisis de los resultados de una encuesta de líderes*. [Working Paper. Universidad Torcuato Di Tella]. Repositorio Digital Universidad Torcuato Di Tella.
<https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/12988>

El presente documento se encuentra alojado en el Repositorio Digital de la Universidad Torcuato Di Tella con la misión de archivar, preservar y difundir el acervo histórico de la investigación ditelliana

Dirección: <https://repositorio.utdt.edu>

UNIVERSIDAD TORCUATO DI TELLA**

WORKING PAPER N° 62



**LA DIRIGENCIA ARGENTINA Y EL PROCESO
DE REFORMAS ECONÓMICAS DE LOS 90:
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE UNA ENCUESTA DE LÍDERES¹**

Carlos Gervasoni

Abril de 2001

ABSTRACT: Como parte del proyecto de investigación **Estado y Mercado en la Argentina Post-Reformas**, se realizó una encuesta de líderes sobre la temática del proyecto. Este documento describe su diseño metodológico y analiza sus principales resultados². Se incluyen también tres anexos con el listado de los entrevistados que autorizaron la publicación de su nombre, el texto de todas las preguntas del cuestionario y la descripción de las variables generadas a los fines del análisis.

* Universidad Torcuato Di Tella
Departamento de Ciencia Política y Gobierno
Miñones 2159/7
C1428ATG Capital Federal
Tel.Fax: 4784-0080 int. 163

** Los juicios y opiniones vertidas en los documentos de trabajo de la Universidad Torcuato Di Tella son de la exclusiva responsabilidad de los autores y no comprometen a la institución académica que los publica.

*El presente documento se benefició de los comentarios realizados por Ana Margheritis y Félix Schlichter.

¹ El equipo a cargo de la encuesta estuvo constituido por: 1) los responsables generales del proyecto de investigación: Juan Carlos Torre, José María Ghio, Ana Margheritis y Sergio Berensztein, 2) el encargado del diseño y la metodología de la encuesta y del procesamiento y análisis de sus resultados: Carlos Gervasoni, 3) el coordinador general de la encuesta: Damián Staffa y, 4) los asistentes de investigación, a cargo del trabajo de campo y la codificación: Mercedes Funes, Flavio Fuertes, Agustina Giraudy, María José López Martínez, Bárbara Murphy y Félix Schlichter. Tres de las encuestas fueron administradas por Andrea Balzano, Emilio Scarlata del Pogieto y Germán Sturzenegger.

1. Diseño metodológico

Frente a las diversas opciones metodológicas que en principio se presentaban como posibles, se decidió realizar una encuesta de características cuantitativas tanto en términos del diseño muestral como del tipo de instrumento de recolección de datos. Se apuntó a diseñar una muestra razonablemente representativa del universo de interés con el objeto de garantizar que las estimaciones se aproximen a los parámetros poblacionales con niveles aceptables de error muestral y sesgo². Consistentemente con este enfoque cuantitativo, se optó por administrar un cuestionario estructurado con preguntas cerradas y abiertas que permitieran el análisis estadístico de los datos recogidos.

Dada la naturaleza del universo a abordar, se decidió que los cuestionarios fueran administrados en forma oral y personal por encuestadores de alto nivel educativo y buena presencia, previo envío de una carta de presentación del proyecto y concertación telefónica de una cita en el lugar, fecha y horario sugerido por el entrevistado. De esta forma se descartaron técnicas de encuesta más económicas, como las telefónicas o por correo, las primeras por la dificultad que plantean para administrar cuestionarios de cierta duración y complejidad, y las segundas por su inevitable muy baja tasa de respuesta.

1.1. Universo y muestra

Se definió al universo como el conjunto de líderes o dirigentes nacionales relevantes de la Argentina. De esta simple definición se deriva la necesidad de definir una serie de términos:

“Líderes o dirigentes”: son personas que toman decisiones de políticas públicas o influyen en la toma de esas decisiones a través de cualquier medio directo (presión política, asesoramiento técnico, condicionalidad económica, etc.). De esta forma no sólo los legisladores que proponen y aprueban una norma y el ministro que la aplica son líderes, sino también el presidente de la cámara empresaria que presiona para su aprobación, el sindicalista que logra imponer ciertas modificaciones, el académico que colabora en su diseño técnico, etc. No se incluyen periodistas porque su influencia no es directa, sino a través del impacto de sus mensajes sobre la opinión pública, que a su vez es tenida en cuenta por los *policy-makers*.

“Nacionales”: implica que influyan en políticas públicas de nivel nacional (por eso el universo no incluye legisladores o funcionarios de nivel provincial o municipal, salvo gobernadores, ciertos ministros de provincias grandes e intendentes de grandes ciudades, los cuales por su importancia a menudo influyen en decisiones del gobierno federal).

² La alternativa habría sido un estudio cualitativo, basado en una muestra pequeña y no necesariamente representativa. En ese caso el relevamiento probablemente habría sido realizado mediante entrevistas en profundidad. Las características de la muestra y el tipo de datos recolectados bajo un diseño metodológico cualitativo no hubieran permitido analizar la información en forma estadística.

“Relevantes”: significa que deben ser lo suficientemente poderosos como para influir significativamente en políticas públicas también significativas. Es prácticamente imposible definir criterios objetivamente medibles de “relevancia” o “significatividad”. La decisión acerca de qué líderes son relevantes quedó a cargo de los responsables del proyecto, quienes en base a su conocimiento del sistema político nacional y a consultas con especialistas en cada sector del universo, arribaron a consensos sobre el particular. En la mayoría de los casos la relevancia de un líder es indiscutible (el Presidente, sus ministros, los presidentes de bloque y comisiones poderosas del Congreso, los grandes empresarios, los líderes de los sindicatos más numerosos, etc.).

“Argentina”: no significa que los miembros del universo tengan que ser argentinos, sino que influyan sobre políticas públicas implementadas en la Argentina. El universo, por ejemplo, incluye empresarios y funcionarios de organismos financieros internacionales que son extranjeros.

El problema de la definición imprecisa de los límites del universo de los líderes de un país es prácticamente insoluble, aunque puede ser aminorado por la vía de una definición rigurosa de lo que es un líder y por una determinación clara de los tipos de líderes que se consideran: la presente investigación definió 7 sectores dirigentes y 20 subsectores, según indica la tabla A:

Tabla A. Sectores y subsectores del universo y distribución de los casos de la muestra

Sectores	Casos				Subsectores	Casos planeados	Casos realizados
	Planeados n	%	realizados n	%			
Líderes políticos y gubernamentales	38	31,7	42	32,3	Líderes partidarios	4	4
					Poder Ejecutivo Nacional	12	15
					Líderes provinciales y municipales	6	5
					Legisladores nacionales	12	12
					Poder Judicial de la Nación	4	6
Líderes Empresarios	38	31,7	46	35,4	Empresarios	24	33
					Banqueros	10	9
					Empresarios de AFJPs y Seguros	4	4
Líderes sindicales	16	13,3	10	7,7	Líderes de la CGT	3	-
					Líderes de otras centrales sindicales	2	2
					Líderes de grandes sindicatos	12	8
Líderes intelectuales	12	10,0	15	11,5	Consultores económicos, legales y políticos	9	11
					Intelectuales influyentes	3	4
Líderes religiosos	4	3,3	3	2,3	Obispos	4	3
Líderes sociales	8	6,7	11	8,5	Líderes de asociaciones de consumidores	1/2	2
					Líderes de organiz. de derechos humanos	1	2
					Líderes de organiz. de derechos ciudadanos	1	1
					Presidentes de colegios profesionales	1/2	2
					Presidentes de cámaras empresarias	3/4	4
Líderes de organismos internacionales	4	3,3	3	2,3	Representantes de organismos internacionales	4	3
Total	120	100	130	100		120	130

La tabla A también indica el tamaño y la distribución de la muestra. Se planeó realizar unas 120 entrevistas, correspondiendo a cada subsector entre 1 y 24 casos. Los criterios de asignación de los casos a cada sector y subsector fueron los siguientes:

1. Importancia relativa del sector en términos de influencia sobre las políticas públicas: los sectores considerados por los responsables del proyecto como los más importantes en términos de decidir políticas recibieron más casos. Así, por ejemplo, queda claro que se considera que los políticos y los empresarios son los dirigentes más poderosos (31,7% de la muestra cada uno).
2. Heterogeneidad del sector: dado que la variabilidad de una estimación muestral aumenta junto con la heterogeneidad o dispersión de la variable que se desea estudiar, y que es muy probable que las variables de interés se distribuyan más complejamente en los sectores de gran diversidad interna, se decidió asignar más casos a los sectores más heterogéneos.
3. Tamaño del universo: en algunos sectores el número de casos estuvo claramente limitado por el reducido tamaño del universo. Por ejemplo, se identificaron sólo 4 organismos internacionales lo suficientemente importantes como para ser incluidos en nuestro universo. La muestra, consecuentemente, no podía ser mayor que 4 casos.

Al interior de cada sector se procedió a seleccionar muestras de criterio. Los responsables de la investigación decidieron quiénes serían contactados sobre la base de tres criterios: 1) grado de influencia: se dio prioridad a los líderes considerados más importantes, 2) diversidad sectorial: se aseguró que todos los grupos relevantes dentro de cada subsector estén debidamente representados (por ejemplo todos los partidos importantes en la muestra de legisladores, o todas las ramas de actividad significativas en la de empresarios) y 3) diversidad geográfica: se apuntó representar las diferentes regiones del país, teniéndose especial cuidado en no sobrerrepresentar al área metropolitana de la ciudad de Buenos Aires.

Las muestras de criterio por definición dejan en manos del investigador (y no del azar) la selección de los entrevistados y, consecuentemente, pueden generar cuestionamientos por parte de otros investigadores. A los efectos de hacer lo más transparente posibles nuestras decisiones muestrales, además de explicarse aquí los criterios utilizados, se presentan en el anexo I los nombres de las personas y organizaciones entrevistadas que así lo autorizaron.

Desde ya no siempre fue posible conseguir entrevistas con todas las personas que integraban la muestra original. En algunos casos hubo notorias resistencias, las que implicaron desvíos considerables entre la muestra planeada y la realizada. Así, por ejemplo, los nueve jueces de la Suprema Corte de Justicia rechazaron la entrevista³, al igual que la enorme mayoría de los principales senadores del PJ y una importante cantidad de sindicalistas. También se hizo difícil acceder a los directivos algún sector empresario, como las grandes exportadoras de granos, oleaginosas y aceites. La distribución de casos planeada y la realizada son presentadas en las últimas dos columnas de la tabla A. Allí se ve que, aunque en total se lograron 10 entrevistas más de lo planeado, hay sectores que no pudieron ser completados.

Las diferencias entre la muestra planeada y la efectivamente realizada implicaban una modificación de los pesos relativos de los sectores. Por ejemplo, la decisión de asignar a los líderes sindicales un 13,3% de los casos (16 de 120) fue sustancialmente alterada por el relativamente pequeño tamaño del universo (no hay demasiados grandes sindicatos nacionales) y la gran dificultad en lograr entrevistas en ese sector. Al final del trabajo de campo sólo se habían logrado 10 encuestas sobre el total de 130. De esta forma el peso relativo de los sindicalistas en la muestra bajó del 13,3% planeado al 7,7% realizado. A los efectos de evitar que los pesos sectoriales relativos sean modificados indebidamente por factores como el tamaño de los sub-universos o tasas diferenciales de rechazo entre los diferentes sectores, se ponderaron los resultados de forma tal de restablecer el peso relativo planeado de cada sector. Así, siguiendo con el ejemplo del gremialismo obrero, a los 10 casos relevados en este segmento se les aplicó un factor de ponderación igual a 1,733. El número de casos ponderado, entonces, se elevó a 17,33, lo que representa un 13,3% de los 130 casos efectivamente realizados. De esta forma,

³ Se recibieron rechazos individuales por parte de cada uno de los nueve jueces de la Corte y una comunicación institucional indicando que no se concederían las entrevistas solicitadas porque los temas del estudio no estaban vinculados con el Poder Judicial. Los jueces no parecen haber considerado el hecho de que numerosos e importantes casos vinculados a la temática de la encuesta, como privatizaciones e impuestos, fueron en última instancia decididos por ellos.

independientemente del sub o sobrecumplimiento de las cuotas asignadas a cada sector, cada uno de ellos tienen en los resultados el peso relativo planeado indicado en la tabla A.

1.2. Cuestionario

Como queda dicho, se recurrió a un instrumento de recolección de datos estructurado con preguntas abiertas y cerradas, administrado por encuestadores entrenados al efecto. Su duración promedio fue de unos 50 minutos, aunque con gran variabilidad de respondiente a respondiente.

El cuestionario fue diseñado por los responsables generales y metodológicos de la investigación. Se definieron básicamente 4 bloques de variables: preguntas de clasificación (información acerca de características de los entrevistados), preguntas sobre el estado y su reforma, preguntas sobre privatizaciones y regulación de empresas privatizadas y preguntas sobre política fiscal e impositiva. Dentro de cada bloque se identificaron las variables conceptuales de interés y se procedió a operacionalizarlas en un proceso de varias etapas al cabo del cual los investigadores creemos haber obtenido indicadores válidos, confiables e insesgados de aquéllas variables (el texto completo del cuestionario es presentado en el anexo II).

Siguiendo estándares aceptados de rigurosidad, el cuestionario fue probado antes de comenzar el trabajo de campo. Nuestros encuestadores entrevistaron a 5 personas, de perfil similar al de los integrantes del universo⁴. De esta prueba surgieron algunas modificaciones al cuestionario. Una de las más importantes fue hacer un esfuerzo adicional en términos de reducir su duración, ya que a menudo fue considerado demasiado extenso por los entrevistados. También se ajustó el vocabulario para hacerlo menos técnico y más comprensible.

1.3. El trabajo de campo

El trabajo de campo fue dirigido por el coordinador general de la encuesta y llevado a cabo por los asistentes de investigación (ver nota 1). El mismo comenzó en mayo de 1999 con el envío de las primeras cartas. Unos días más tarde se inició la concertación de entrevistas. La primera de ellas se realizó el día 4 de mayo. La gran mayoría de las entrevistas (105, o el 80,8%) se realizó en los meses de junio y julio, y la última nos fue concedida el día 16 de septiembre de 1999.

A cada integrante de la muestra se le envió una carta firmada por las autoridades de la universidad y del proyecto de la investigación explicándose la naturaleza del mismo, enfatizando la importancia de contar con sus respuestas y presentándose brevemente los nombres y antecedentes de los miembros del equipo de investigación. Unos días más tarde los asistentes de investigación llamaban telefónicamente a estas personas (o, más frecuentemente, a sus secretarías o asistentes) para confirmar la recepción de la carta y para intentar concertar la entrevista, siempre adaptándose a las preferencias de lugar, fecha y horario del potencial entrevistado. Los rechazos se expresaron tanto en la forma de negativas frontales como en la de postergaciones repetidas.

⁴ Se trató de dos jueces, un empresario, un alto ejecutivo de una empresa automotriz y un líder partidario con formación económica.

Los encuestadores fueron alumnos universitarios o jóvenes graduados en el área de las ciencias sociales entrenados en la concertación y realización de entrevistas. En general se organizó el trabajo de forma tal que cada encuestador se especializara en alguno de los sectores o subsectores a entrevistar. Todas las encuestas fueron hechas en forma personal, evitándose la autoadministración del cuestionario por parte de los entrevistados. Tampoco se aceptó que un representante del entrevistado contestara por él⁵.

2. Resultados

2.1. El perfil de los entrevistados

La tabla A muestra la cantidad de entrevistados que proviene de cada sector y subsector. En el Anexo I se presenta el listado de aquellos que autorizaron la publicación de su nombre y/o el de la institución a la que representan. En esta sección se presenta información estadística sobre características sociodemográficas, laborales y políticas de todos los entrevistados y de cada sector. La tabla 1 resume dicha información.

Los líderes argentinos son casi en su totalidad hombres con un promedio de edad de 53 años (es decir, nacidos en 1945 o 1946). Un 80% declara tener estudios universitarios y/o de postgrado, aunque hay diferencias importantes por sectores: Los consultores e intelectuales poseen en su mayoría doctorados y maestrías, mientras que la mayor parte de los líderes sindicales no superó la educación secundaria. En los otros tres sectores -políticos, empresarios y líderes de la sociedad civil-, la categoría más frecuente es "estudios universitarios completos", siendo los empresarios los que tienen la mayor proporción de estudios de postgrado y los políticos y gobernantes los que tienen la menor.

⁵ En varias ocasiones el entrevistado derivó al encuestador a un asesor, asistente o persona de confianza. Frente a esta situación se decidió que, no pudiéndose asegurar la total coincidencia entre las respuestas de una y otra persona, no se aceptaría este tipo de entrevistas con intermediarios.

Tabla 1. Variables de clasificación de los encuestados según sector al que pertenecen

	Políticos y gobernantes	Empresarios	Sindicalistas	Consultores e intelectuales	Líderes de la sociedad civil	Total
Hombres	93	100	89	88	85	93
Mujeres	7	-	11	12	15	7
Edad promedio (en años)	53,8	50,3	52,2	53,4	61,0	53,1
Desviación estándar	8,8	9,6	8,4	7,2	12,9	9,7
Nivel educativo						
Hasta 1 ^{ro} . completo	-	5	12	-	-	2
Hasta 2 ^{ro} . completo	2	-	41	-	15	9
Hasta univers. Incompleto ¹	5	7	29	-	8	9
Universitario completo	63	38	18	18	39	41
Postgrado/especialización	15	21	-	24	8	15
Maestría	5	19	-	18	15	12
Doctorado	10	7	-	41	15	12
No responde	-	2	-	-	-	1
Area de estudios univers.						
Derecho	43	26	11	24	42	29
Economía	25	17	-	65	8	20
Ingeniería	10	19	-	-	8	9
Administración	-	14	-	-	-	5
Contabilidad	3	10	-	-	8	4
Otras	12	5	11	6	17	6
No tiene estudios universit.	3	5	78	-	17	15
No responde	5	5	-	6	-	13
Argentinos	100	88	100	77	100	93
Extranjeros	-	10	-	24	-	6
No responde	-	2	-	-	-	1
Nacidos en...						
Capital Federal	20	55	41	50	69	43
Provincia de Buenos Aires ²	32	14	41	6	23	23
Otras provincias	42	17	18	11	8	23
Exterior	5	12	-	28	-	9
No responde	2	2	-	6	-	2
Casos (no ponderados)	42	46	10	18	14	130

Nota: las cifras representan porcentajes verticales salvo cuando se indica que son promedios (medias aritméticas), medianas, desviaciones estándar o casos.

1. Incluye estudios terciarios incompletos y completos.
2. Incluye los partidos del conurbano bonaerense.

(continúa)

Tabla 1 (contin.). Variables de clasificación de los encuestados según sector al que pertenecen

	Políticos y gobernantes	Empresarios	Sindicalistas	Consultores e intelectuales	Líderes de la sociedad civil	Total
Residentes en...						
Capital Federal	44	71	59	83	46	60
Provincia de Buenos Aires ²	32	24	29	17	54	29
Otras provincias	24	2	12	-	-	10
No responde	-	2	-	-	-	1
Trabajan en...						
Capital Federal	71	86	89	94	62	80
Provincia de Buenos Aires ²	15	12	11	-	39	14
Otras provincias	15	-	-	-	-	5
Exterior	-	-	-	6	-	1
No responde	-	2	-	-	-	1
Años trabajando en...						
Buenos Aires ³	16,4	21,4	32,8	22,1	31,0	22,6
Interior del país	16,7	1,4	2,2	1,8	3,1	6,3
Residencia en el exterior						
Si	37	73	11	78	46	51
No	59	24	89	17	54	46
No responde	5	2	-	6	-	3
Años trabajados en...						
Sector público	19,8	2,3	13,0	4,4	5,3	9,9
Sector privado	13,4	26,4	19,7	18,6	22,9	20,0
Organismos internacionales	1,5	0,6	5,3	5,4	3,1	2,4
Tercer sector	3,0	2,1	19,9	4,7	23,0	7,2
Antig. en cargo actual						
Media (en años)	4,4	3,9	10,7	10,3	6,6	6,0
Desviación estándar	4,1	2,7	4,3	13,4	5,0	6,4
Identificación partidaria						
Partido Justicialista	35	5	59	11	-	21
Acción por la República	5	21	-	11	7	11
Unión Cívica Radical	20	5	-	6	7	9
FREPASO	5	-	18	-	14	5
Alianza	5	-	-	28	-	5
Otros	15	5	12	-	-	8
Ninguno	8	57	12	44	43	33
No responde	8	7	-	-	29	8
Casos (no ponderados)	42	46	10	18	14	130

Nota: las cifras representan porcentajes verticales salvo cuando se indica que son promedios (medias aritméticas), desviaciones estándar o casos.

3. Definido ampliamente como la aglomeración urbana desde Campana hasta La Plata.

Entre los encuestados que completaron estudios universitarios predominan dos carreras, derecho y economía, destacándose también ingeniería, administración de empresas y contabilidad. Entre los políticos y los líderes de la sociedad civil predominan los abogados, seguidos de los economistas, mientras que entre los empresarios la frecuencia relativa de las carreras mencionadas es más pareja (la carrera más frecuente es derecho, pero las ciencias económicas tomadas en conjunto la superan ampliamente) y entre los intelectuales predominan los economistas. Aunque la tabla 1 no lo muestra, aquellos que tienen estudios de postgrado tienden a concentrarse en las áreas de administración de empresas y economía, y en menor medida en derecho.

Los líderes entrevistados son predominantemente de nacionalidad argentina. Sólo un 6% declaró que su nacionalidad principal era otra. Estas personas, como era de esperar, se concentran entre los empresarios y los consultores e intelectuales (debe recordarse que esta categoría incluye a los representantes de los organismos financieros internacionales, a menudo extranjeros).

Se inquirió sobre lugar de nacimiento, lugar de residencia habitual y lugar de trabajo. Sólo un 9% nació en el exterior, con un 43% nacidos en la Capital Federal⁶, un 23% en la Provincia de Buenos Aires, y un 23% en el interior del país. El sector más "porteño" es el de los líderes sociales, seguido de los empresarios. El segmento más "provinciano" resulta ser el de los líderes político y gubernamentales, lo cual en parte se explica por la naturaleza federal del gobierno argentino, la mayor cantidad de votantes -y por lo tanto de legisladores- del interior, y la sobrerrepresentación que las provincias tienen en ambas cámaras del Congreso Nacional⁷. La mayoría de los líderes residen en la Capital Federal, y una proporción aún más alta trabaja en ese distrito⁸. En ambos casos la Provincia de Buenos Aires,

⁶ Es probable que haya algún equívoco en la utilización de las palabra "Capital Federal". Seguramente más de un entrevistado nacido en algún partido del conurbano se considerará nativo de Buenos Aires y, por lo tanto, de la "Capital". Otros, en la misma situación, habrán declarado nacimiento en la Provincia de Buenos Aires, lo cual es técnicamente cierto aunque muy diferente de haber nacido en Carmen de Patagones. Lamentablemente esta variable no fue medida con la suficiente precisión como para saber con certeza si una persona nació en la Capital Federal, en el conurbano bonaerense o en una localidad del interior de la Provincia de Buenos Aires.

⁷ El senado es por naturaleza no proporcional: tanto bajo el anterior como el nuevo sistema de elección de senadores, cada provincia envía la misma cantidad de representantes a la cámara alta, independientemente de su magnitud demográfica. Aunque en la Cámara de Diputados los distritos más grandes cuentan con más representantes, la existencia de un mínimo de diputados por provincia (5) provoca que las más despobladas estén sobrerrepresentadas (mientras que la Capital Federal y la Provincia de Buenos Aires están fuertemente subrepresentadas).

⁸ Cabe preguntarse en que medida la alta concentración de la muestra en la ciudad de Buenos Aires es un reflejo de la realidad o un artificio de un sesgo a favor de la capital proveniente de, por ejemplo, la localización de la Universidad, el lugar de residencia del equipo de investigación o las dificultades logísticas para entrevistar personas en el interior. Es posible que alguno de estos factores haya inclinado en alguna medida la muestra hacia Buenos Aires, pero debe quedar claro que la naturaleza del universo investigado hace que tenga inevitablemente una alta concentración en esa ciudad. Los líderes políticos y gubernamentales nacionales, con pocas excepciones como algunos jueces federales, desarrollan sus tareas en la capital. Las grandes empresas y bancos casi siempre tienen sus casas centrales en Buenos Aires, aún cuando sus unidades productivas puedan estar en otros lugares. Algo similar ocurre con los sindicatos, las más importantes consultoras y centros de investigación, las grandes ONGs y las representaciones de los organismos internacionales. Dado que se trata de una muestra de los más importantes líderes del país y teniendo en cuenta la enorme ventaja en términos de importancia política y económica que Buenos Aires le lleva a las demás ciudades del país, es esperable que una muy alta proporción de los líderes viva y trabaje allí (el 60% reside y el 80% trabaja en la Capital Federal).

incluyendo al conurbano, es el segundo distrito en importancia, quedando las provincias del interior muy relegadas. Por los motivos ya explicados, son siempre los líderes políticos y gubernamentales los que tienen mayor presencia en el interior,

Este predominio porteño se refleja también en la cantidad de años trabajados por los entrevistados en cada lugar del país: mientras que la media de años trabajados en Buenos Aires es de 22,6, la cifra para el interior es de apenas 6,3 años (un promedio que en buena parte es producto de que el 69% de los entrevistados nunca trabajó en el interior del país, mientras que sólo un 4% nunca trabajó en Buenos Aires). En esto también son diferentes los líderes políticos: en promedio han trabajado la misma cantidad de tiempo en una y otra región.

Aproximadamente la mitad de los entrevistados residió en el extranjero por más de dos meses (el límite temporal que se definió para decidir si una persona había tenido o no una experiencia significativa de vida en el exterior). Como era de esperar, los intelectuales y los empresarios son los grupos más "internacionalizados", mientras que los sindicalistas ocupan el extremo contrario. Resulta interesante destacar la relativamente baja proporción de políticos y gobernantes con experiencias en el extranjero. De los que vivieron en el exterior, un 84% lo hizo por motivos de estudio y un 80% por motivos de estudio, con sólo un 8% haciéndolo por motivos familiares y un 11% por otras razones (en esta categoría aparecen la mayoría de los entrevistados extranjeros). Estos porcentajes suman más de 100% porque a menudo la misma persona residió en el exterior por más de un motivo. Estados Unidos es por lejos el país en el que residió mayor proporción de entrevistados (el 38% del total y el 79% de los que vivieron en el exterior). Le siguen Francia, Inglaterra, Italia y España, con aproximadamente el 5% del total y el 11% de los que vivieron fuera cada uno. Un escalón más abajo aparecen Brasil y Chile. Ningún otro país cuenta con porcentajes significativos.

Los entrevistados han trabajado un promedio de 20 años en el sector privado, 10 años en el sector público, 7,2 años en el tercer sector, y 2,4 años en organismos internacionales. Se dan los patrones lógicos: los líderes políticos y gubernamentales tienen más experiencia laboral en el estado, los empresarios y consultores en el sector privado y los líderes sociales en el tercer sector. Los que superan claramente al promedio en organismos internacionales son los intelectuales y los sindicalistas.

Los dos últimos grupos mencionados en el párrafo anterior también son los que vienen durando más en sus cargos (más de 10 años, aunque con mucha más dispersión entre los consultores e intelectuales). La duración en el cargo es menor entre los líderes de organizaciones sociales, y aún más reducida entre políticos y empresarios.

Un 60% de los entrevistados eligió a algún partido como "aquél con el que se siente más identificado" (los políticos y los sindicalistas fueron los más propensos a elegir un partido). El PJ fue mencionado por el 21% de la muestra, Acción por la República (el recientemente fundado partido de Domingo Cavallo) por el 11%, la UCR por el 9% y el FREPASO y la Alianza por el 5% cada uno. Si se cuentan las menciones de la Alianza o sus componentes, se llega al 19%, apenas por debajo del PJ. Otros partidos, como los provinciales, cosecharon un 8%. El PJ predomina ampliamente entre los sindicalistas y supera a los demás (incluyendo a toda la Alianza

sumada) entre los líderes políticos y gubernamentales (lo cual refleja el hecho de que, al momento de realizarse el estudio, el PEN y la mayoría de las gobernaciones estaban dominadas por el peronismo que, además, contaba con una mayoría moderada en la Cámara de Diputados y una muy amplia en el Senado. El segundo lugar que obtiene AR en el ranking general proviene casi exclusivamente de su popularidad entre los empresarios (y, en menor medida, entre los consultores e intelectuales). La UCR es el segundo partido más fuerte entre los políticos, pero cosecha escasas adhesiones en el resto de los segmentos. El FREPASO, por su parte, logra mayor fuerza entre los líderes sindicales y los sociales.

2.2. El Estado

El estado, definido weberianamente como el conjunto de instituciones que dentro del territorio ejerce legalmente el poder y posee el monopolio de la coerción, fue objeto de buena parte del cuestionario. Se indagó sobre modelos de estado preferidos, sobre la relación de los entrevistados con el estado nacional argentino, sobre su evaluación acerca de la *performance* estatal en varias áreas, etc. Aunque hubo un explícito esfuerzo por aclarar que se buscaba opiniones sobre las instituciones estatales argentinas en lo que tienen de estructural y no sobre el gobierno de turno, seguramente las respuestas han sido "contaminadas" por la coyuntura del gobierno de Menem (hasta al más sofisticado analista político le costaría separar completamente aquellos dos conceptos). En este sentido es importante tener siempre presente al momento de interpretar los resultados el momento político en que se realizó la encuesta (junio a septiembre de 1999, es decir, durante los últimos meses de los 10 años de gobierno de Menem).

Relación de los entrevistados con el estado

Como era de esperarse, la mayoría de los entrevistados dedican una buena cantidad de su tiempo a relacionarse de una forma u otra con los diversos organismos centralizados y descentralizados de la administración pública nacional, provincial y municipal. Una pregunta sobre la cantidad de horas promedio semanales dedicadas a tratar con el estado fue incluida en el cuestionario como un indicador de la intensidad de la relación líderes-administración pública. La media de esa variable, como indica la tabla 2, es de 14,5 horas. Asumiendo una semana de 45 horas de trabajo, el entrevistado promedio dedica prácticamente un tercio de su tiempo al estado. Este valor, sin embargo, es fuertemente influenciado por las respuestas de los líderes políticos y gubernamentales. Excluyéndolos la media se ubica en unas 9 horas, o en aproximadamente un 20% del total de horas trabajadas por líderes no políticos. Debe tenerse en cuenta también que las medianas tienden a ser inferiores a las medias en todos los sectores, lo cual significa que hay casos extremos positivos que traccionan las medias hacia arriba. Es decir que en cada sector hay líderes que por sus funciones, inclinaciones o coyuntura dedican a relacionarse con el estado muchas más horas que sus colegas.

Tabla 2. Indicadores de la relación de los encuestados con el estado según sector al que pertenecen

	Políticos y gobernantes	Empresarios	Sindicalistas	Consultores e intelectuales	Líderes de la sociedad civil	Total
Horas dedicadas al estado¹						
Media -	29,4	6,5	14,8	9,2	9,7	14,5
Desviación estándar	23,7	7,8	11,5	9,6	14,6	17,5
Mediana	22,4	3,0	11,0	5,6	3,3	8,1
% que dedica menos de 1 hr.	0	10	0	7	8	5
Casos (no ponderados)	31	44	10	14	12	111
Organismos estatales con los que más se relaciona²						
Poder Ejecutivo Nacional	55	55	69	70	46	58
Entes y organismos descent.	10	26	19	17	17	18
Poder Ejecutivo Provincial	20	8	0	4	14	10
Poder Legislativo Nacional	7	3	8	3	9	5
Poder Ejecutivo Municipal	1	4	4	0	5	3
Poder Judicial de la Nación	4	0	0	5	9	3
Otros	3	5	0	0	0	3
Casos (no ponderados)	37	42	10	15	13	117

Base: entrevistados que contestaron la pregunta correspondiente.

Nota: las cifras representan porcentajes verticales salvo cuando se indica que son promedios (medias aritméticas), medianas, desviaciones estándar o casos.

1. Cantidad de horas de trabajo semanales dedicadas a relacionarse con la administración pública nacional, provincial o municipal (el texto completo de la pregunta puede ser consultado en el anexo II).

2. % de menciones obtenidas por los organismos de la jurisdicción indicada como porcentaje del total de menciones (118 entrevistados contestaron la pregunta obteniéndose 286 respuestas).

Luego del de los gobernantes, el sector que pasa más tiempo en tratativas con el estado es el de los sindicalistas. Los empresarios son, en todos los indicadores tomados, los que menos se relacionan con las instituciones gubernamentales.

El PEN (es decir, las agencias gubernamentales centralizadas del poder ejecutivo nacional) es por lejos la parte del estado más mencionada por los entrevistados como aquella con la que tienen más relación: el 58% del total de las dependencias estatales mencionadas pertenecen a ese área del estado (con picos entre los sindicalistas y los consultores). Muy por detrás aparecen los entes de la administración nacional descentralizada (como el PAMI o el ANSES) y los poderes ejecutivos provinciales. Los primeros son más mencionados por los empresarios, mientras que los segundos predominan entre los líderes políticos.

Quizás no deban sorprender las pequeñas cifras cosechadas por el poder legislativo nacional. Aunque buena parte de las decisiones vitales que afectan a los sectores encuestados pasan por el congreso, la naturaleza de sus funciones hace que no sea necesaria una acción permanente sobre él. La gran preponderancia de lo nacional sobre lo provincial y municipal se explica en parte por

las limitaciones de nuestro federalismo, pero también por la naturaleza del universo estudiado: al tratarse de los líderes más relevantes es natural que sus asuntos tengan que ver con el nivel más alto de gobierno. Es más, la propia definición del universo exigía que se tratara de personas con influencia importante sobre las políticas públicas de nivel nacional (ver punto 1.1., "Universo y Muestra").

Evaluación del estado argentino

El cuestionario incluyó algunas preguntas relativas al funcionamiento del estado argentino. La tabla 3 resume la evaluación de los entrevistados sobre su desempeño en general y en 10 áreas en particular. Se utilizó una escala de 5 categorías y se calcularon medias en base a asignar un 1 a la categoría más negativa y un 5 a la más positiva. En la mitad superior de la tabla 3 se ve que la nota promedio otorgada al estado nacional argentino fue un pobre 2,05 (siendo 1 la peor nota y 3 la nota intermedia), siendo los sindicalistas los más benévolo y los empresarios los más severos. Cabe destacar que los líderes políticos y gubernamentales, directamente responsables del desempeño de las instituciones estatales, no otorgaron mejores calificaciones. La relativamente alta desviación estándar, sin embargo, indica una mayor dispersión de las opiniones entre los políticos que entre los demás sectores, la cual podría ser efecto de una evaluación más positiva por parte del oficialismo y una más negativa de los opositores. Esta idea es confirmada por los datos: la media de la evaluación de los líderes políticos identificados con el PJ es de 2,8, mientras que la media correspondiente a los que se identifican con la UCR, el Frepaso y AR es 1,4, 1,5 y 2, respectivamente. Esto significa que el promedio "normal" (esto es, parecido al promedio del resto de la muestra) de los políticos es en realidad producto de una evaluación muy crítica por parte de la oposición y una evaluación intermedia por parte del oficialismo peronista. Ni siquiera estos últimos, sin embargo, llegan a asignar una buena nota al estado argentino.

Nótese que ningún entrevistado calificó la capacidad del estado como "muy alta" y apenas una escasa minoría de políticos la evaluó como "alta". Un cuarto de la muestra eligió la alternativa "media", casi la mitad se inclinó por "baja" y el cuarto restante lo hizo por "muy baja".

La evaluación por áreas que aparece en la mitad inferior de la tabla 3 muestra que sólo una de ellas supera a la nota intermedia de 3: infraestructura con un 3,5. Esto parece reflejar las mejoras recientes en áreas como telecomunicaciones, electricidad, autopistas y puertos. La política fiscal aparece relativamente bien evaluada, mientras que las políticas de corte social, como la vivienda, la educación y la salud, aparecen algo más rezagadas. Dos áreas ocupan claramente el último puesto en la consideración de los entrevistados: la justicia y la seguridad.

Algunas diferencias en términos sectoriales que vale la pena destacar son las que separan a consultores y empresarios respecto de la política fiscal, a empresarios/consultores y sindicalistas respecto de las jubilaciones y a políticos y empresarios respecto de la justicia.

Tabla 3. Evaluación de la capacidad del estado argentino para satisfacer la demanda de bienes públicos en general y en 10 áreas específicas según sector al que pertenecen los encuestados

	Políticos y gobernantes	Empresarios	Sindicalistas	Consultores e intelectuales	Líderes de la sociedad civil	Total
Evaluación general de la capacidad del estado						
Muy alta	-	-	-	-	-	-
Alta	7	3	-	-	-	3
Media	32	5	50	12	54	26
Baja	39	55	39	65	23	46
Muy baja	22	38	11	24	23	26
Media (mín. = 1; máx. =5) ¹	2,25	1,71	2,40	1,89	2,27	2,05
Desviación estándar	0,90	0,66	0,68	0,63	0,86	0,80
Casos (no ponderados)	42	45	10	18	14	129
Evaluación media² del desempeño del estado en...						
Infraestructura	3,5	3,4	3,7	3,3	3,6	3,5
Política fiscal	3,2	2,8	2,5	3,5	2,9	3,0
Crédito	3,0	3,1	2,2	3,3	2,8	2,9
Vivienda	3,2	2,9	2,8	2,5	2,7	2,9
Jubilaciones	2,6	3,1	2,2	3,2	2,6	2,8
Educación	2,9	2,6	2,9	2,5	3,1	2,8
Salud	2,9	2,5	2,3	2,3	3,0	2,6
Política social	2,7	2,5	2,3	2,8	2,8	2,6
Justicia	2,5	1,7	2,3	2,1	2,5	2,2
Seguridad	2,4	1,9	2,6	2,1	2,5	2,2
Índice de desempeño estatal ³	2,90	2,64	2,59	2,77	2,83	2,75
Desviación estándar	0,65	0,52	0,63	0,43	0,39	0,56
Casos (no ponderados)⁴	40	41	10	17	13	124

Nota: las cifras representan porcentajes verticales salvo cuando se indica que son promedios (medias aritméticas), desviaciones estándar o casos.

1. Medias calculadas con la siguiente equivalencia numérica: muy alta=5, alta=4, media=3, baja=2 y muy baja=1.

2. Medias calculadas con la siguiente equivalencia numérica: muy bueno=5, bueno=4, regular=3, malo=2 y muy malo=1.

3. Este índice es un promedio no ponderado de las evaluaciones de las 10 áreas de gobierno indicadas en la tabla. Consecuentemente, su rango también abarca de una calificación mínima de 1 a una máxima de 5 (ver anexo III).

4. Se indica la cantidad mínima de casos válidos no ponderados utilizados para calcular las 11 medias de cada columna.

El Índice de desempeño estatal (ver descripción en la nota 3 de la tabla 3 y en el anexo III) es de 2,75 para el total de la muestra, con pequeñas diferencias de sector a sector: los políticos y gobernantes ven las cosas levemente mejor que el promedio, mientras los sindicalistas aparecen un poco por debajo de la media (lo que se explica casi completamente por su negativa opinión sobre la situación del crédito y de las jubilaciones). La mayor desviación estándar vuelve a registrarse entre los políticos, confirmando la heterogeneidad de este sector y, en particular, la diferencia entre los líderes del oficialismo y de la oposición.

Se concluye que, independientemente de moderadas diferencias sectoriales, la clase dirigente argentina tiene una visión bastante negativa (y bastante consensualmente negativa, dado que ninguna de las desviaciones estándar es demasiado alta) sobre el desempeño del estado en casi todas sus funciones más importantes.

Las causas de los problemas de desempeño estatal

Inmediatamente se impone la pregunta: ¿por qué fracasa el estado? ¿por qué creen los entrevistados que las políticas públicas no logran conseguir sus objetivos? La tabla 4 presenta los resultados de una pregunta abierta sobre este tema. Más de la mitad de los entrevistados mencionaron a la ineficiencia de la burocracia estatal como uno de los principales obstáculos para el éxito de las políticas públicas (cada entrevistado podía dar hasta tres respuestas, por eso los totales verticales suman más de 100%). Todas las demás causas destacadas recibieron una cantidad de menciones mucho menor. La corrupción, los errores técnicos en el diseño de las políticas y los intereses políticos, en ese orden, fueron mencionados por alrededor de 1 de cada 5 entrevistados. Algo más abajo aparecen la falta de decisión política, el excesivo tamaño de la burocracia, la falta de presupuesto y cuestiones institucionales y legales. Entre los restantes ítems sólo dos obtuvieron por lo menos el 5% de las menciones (la falta de credibilidad y la falta de coordinación de diversas instancias estatales). Todas las demás respuestas fueron agrupadas en la categoría "otros".

Tabla 4. Percepción sobre los principales obstáculos que enfrentan las políticas públicas para ser implementadas con éxito (pregunta abierta) según sector al que pertenecen los encuestados

	Políticos y gobernantes	Empresarios	Sindicalistas	Consultores e intelectuales	Líderes de la sociedad civil	Total
Ineficiencia e incapacidad del sistema burocrático	53	68	20	60	41	53
Corrupción	21	26	30	15	6	22
Errores de diseño de las políticas	17	14	30	33	12	20
Intereses políticos	11	24	10	5	30	16
Falta de decisión política/falta de liderazgo	16	13	10	0	23	13
Tamaño de la burocracia	10	4	20	5	23	10
Falta de presupuesto	20	4	0	8	0	9
Problemas institucionales y de legislación	7	13	0	15	6	9
Falta de credibilidad	6	7	0	10	6	6
Falta de coordinación de agencias estatales	8	2	10	5	0	5
Otros	18	23	40	28	17	24
No sabe/No responde	2	-	-	6	-	2
Casos (no ponderados)	42	46	10	18	14	130

Nota: las cifras representan porcentajes verticales salvo cuando se indica que son casos. Los porcentajes suman más que 100% por tratarse de una pregunta abierta de respuestas múltiples (se admitieron hasta tres contestaciones por entrevistado).

Los datos de la tabla 4 indican que el diagnóstico de los líderes enfatiza problemas vinculados con la capacidad de la burocracia estatal para cumplir con sus funciones y con la calidad profesional y ética de la dirigencia política (la corrupción, la falta de decisión, errores en el diseño de políticas, etc.), otorgando poca importancia a las limitaciones presupuestarias y/o de recursos materiales. Sin descartar el evidente vínculo entre la disponibilidad de recursos económicos y la capacidad de mejorar la calidad del sistema burocrático (por la vía de incorporación de tecnología, capacitación del personal, etc.), parece claro que los entrevistados perciben que el problema principal es la insuficiente calidad de la gestión del estado argentino. Aquí, como en muchas otras preguntas abiertas de este estudio, las respuestas de los entrevistados implican algún grado de ambigüedad⁹: para algunos la “incapacidad del sistema burocrático” puede significar que los empleados públicos no son eficientes, mientras que otros pueden estar pensando en problemas vinculados con los estilos de organización o las reglas que rigen la acción burocrática.

⁹ La imposibilidad de repreguntar y pedir aclaraciones cada vez que un entrevistado contesta una pregunta abierta produce inevitables problemas de interpretación. Diferentes personas pueden referirse a diferentes cosas con las mismas palabras. La etapa de codificación de preguntas abiertas implica una interpretación de los dichos de un entrevistado y una agregación de aquellas respuestas que resultan, a criterio del investigador, de contenido similar. Consecuentemente, las categorías de respuesta de preguntas abiertas son siempre resúmenes de muchas contestaciones similares pero raramente idénticas. Como muchas entrevistas además de ser registradas por escrito fueron grabadas (con el consentimiento de los entrevistados), en algunos casos de interpretación dudosa se recurrió a estas grabaciones para aclarar el significado de una respuesta.

Lo que queda claro es que el diagnóstico sobre los obstáculos que enfrentan las políticas públicas se centra en la capacidad burocrática estatal y no en otros factores tan plausibles como los errores técnicos o la falta de presupuesto.

El diagnóstico de la tabla 4 es confirmado y refinado por los datos de la tabla 5. Allí se presentan los resultados de una pregunta cerrada en que se les pedía a los entrevistados que ordenaran según su grado de importancia una lista predeterminada de factores que podrían explicar el no siempre buen desempeño del estado argentino. Las cifras que se presentan son rankings promedios. Consecuentemente, los números más chicos indican mayor importancia (un ranking promedio de 1,2, por ejemplo, significaría que la mayoría de los entrevistados asignaron a ese factor el primer lugar en importancia). Las cifras entre paréntesis representan el porcentaje de entrevistados que colocaron a un factor en el primer lugar.

La baja calidad del gerenciamiento público aparece con el ranking promedio más alto, y con más de un cuarto de la muestra considerándolo como el factor más importante. En segundo lugar viene la corrupción de los funcionarios. La falta de planeamiento, que es también un problema de gerenciamiento, aparece en un cercano tercer lugar. La baja calidad de los recursos humanos, en cambio, tiene un ranking bastante más bajo y sólo el 7% lo consideró como el factor más importante. Nuevamente la falta de presupuesto aparece con escasa importancia.

Lo que estos datos agregan a los de la tabla anterior es una más refinada interpretación de los problemas del "sistema burocrático": el énfasis está puesto sobre el gerenciamiento público y la honestidad de los funcionarios, y no sobre la calidad de los recursos humanos. Esto parece sugerir dos interpretaciones: 1) que los problemas se perciben más del lado de los funcionarios de alto nivel (o gerentes públicos) que de sus subordinados y/o 2) que el diagnóstico se centra en los estilos, normas y prácticas de gerenciamiento y control de la acción estatal y no en el personal. Se confirma que la corrupción es percibida como un problema importante y que la falta de presupuesto es de los factores menos importantes.

Tabla 5. Factores que explican el bajo desempeño del estado argentino según sector al que pertenecen los encuestados

	Políticos y gobernantes	Empresarios	Sindicalistas	Consultores e intelectuales	Líderes de la sociedad civil	Total
Baja calidad del gerenciamiento público	2,51 (36)	2,59 (18)	3,56 (13)	1,88 (41)	2,60 (33)	2,59 (27)
Corrupción de los funcionarios	3,19 (17)	2,75 (38)	2,11 (47)	3,97 (-)	2,66 (39)	2,96 (28)
Falta de planeamiento	2,84 (34)	3,45 (20)	2,00 (41)	3,40 (17)	2,98 (17)	3,01 (26)
Falta de liderazgo político	3,49 (31)	3,48 (21)	5,11 (-)	2,88 (24)	3,72 (13)	3,63 (20)
Baja calidad de los recursos humanos	3,47 (9)	3,52 (8)	4,00 (-)	4,08 (5)	3,56 (17)	3,66 (7)
Falta de presupuesto	3,78 (5)	4,85 (3)	3,50 (12)	4,23 (12)	4,82 (8)	4,26 (7)
Casos (no ponderados)¹	35	44	9	18	14	121

Nota: las cifras son rankings promedio (ranking mayor=1, ranking menor=6). Cada encuestado debió ordenar los seis factores que se le presentó del más al menos importante, aceptándose empates. Las cifras entre paréntesis son los porcentajes de entrevistados que eligieron el factor en primer lugar. Suman más de 100% porque, al aceptarse empates, se puede mencionar más de un factor en primer lugar.

1. Se indica la cantidad mínima de casos válidos utilizados para calcular los 6 ranking promedio de cada columna.

Hay algunas diferencias sectoriales importantes. Los sindicalistas tienden a dar menos importancia a la calidad del gerenciamiento y los recursos humanos, y más a la corrupción y la falta de planeamiento. Los consultores e intelectuales priorizan los problemas de gerenciamiento y liderazgo a expensas de los de corrupción.

Previendo que la capacidad e integridad de los cuadros políticos y administrativos del estado podrían aparecer en un lugar prominente del diagnóstico de los líderes sobre los problemas del estado, el cuestionario indagó en forma específica, mediante preguntas cerradas, sobre aspectos relacionados con la calidad de los funcionarios. En la tabla 6 se resumen los resultados de tres preguntas relativas al tema.

La evaluación de los funcionarios públicos nacionales de planta (es decir los que no son funcionarios políticos) es regular, aunque con más opiniones positivas que negativas. La respuesta más frecuente es "regular" (46% del total de la muestra), pero entre los "muy bien" y "bien" suman un 42%, mientras que las dos categorías contrarias apenas reúnen un 6%. El sector que mejor califica a los funcionarios de planta es el de los líderes políticos y gubernamentales, mientras que el más crítico es el de los consultores e intelectuales.

Tabla 6. Evaluación la calidad de los funcionarios públicos según sector al que pertenecen los encuestados

	Políticos y gobernantes	Empresarios	Sindicalistas	Consultores e intelectuales	Líderes de la sociedad civil	Total
Los funcionarios de planta cumplen sus funciones...						
Muy bien	12	-	-	6	-	5
Bien	37	44	41	18	39	37
Regular	39	44	59	53	46	46
Mal	5	5	-	6	8	5
Muy mal	-	2	-	-	-	1
No sabe/No responde	7	5	-	18	8	7
Casos (no ponderados)	42	46	10	18	14	130
Comparación funcionarios provinciales – nacionales						
Mucho mejor (los provinciales)	-	-	-	-	-	-
Mejor	7	12	29	17	14	14
Igual	32	32	41	11	50	32
Peor	46	39	29	39	7	37
Mucho peor	-	5	-	6	-	2
No sabe/No responde	15	12	-	28	29	15
Casos (no ponderados)	42	46	10	18	14	130
Responsabilidad de los fracasos del estado						
De los políticos	41	37	71	44	62	46
De los funcionarios administrat.	2	-	-	-	8	2
De ambos	52	61	29	44	31	49
De ninguno	-	2	-	11	-	2
No sabe/No responde	5	-	-	-	-	2
Casos (no ponderados)	42	46	10	18	14	130

Nota: las cifras representan porcentajes verticales salvo cuando se indica que son casos.

En la comparación entre funcionarios nacionales y provinciales los primeros resultan favorecidos, especialmente entre los políticos, los empresarios y los consultores. Los sindicalistas y los líderes de la sociedad civil, en cambio, no muestran una clara preferencia. Debe destacarse el relativamente alto porcentaje de no respuesta en esta pregunta, lo que refleja el desconocimiento que algunos de los entrevistados tienen del tema. Es importante el hecho, no mostrado en la tabla, de que los entrevistados con residencia en el interior tienen una opinión algo más favorable de los funcionarios provinciales que los que residen en el AMBA.

Los funcionarios de planta son básicamente eximidos de responsabilidades exclusivas por los fracasos del estado argentino, según muestra la última parte de la tabla 4. Prácticamente la mitad de los encuestados cree que esa responsabilidad es de los políticos, mientras que la otra mitad considera que es compartida entre funcionarios políticos y de planta. Sindicalistas y líderes sociales tienden a asignar culpas a los políticos, mientras que los empresarios en general las distribuyen entre los políticos y los funcionarios de planta. Resumiendo: sólo una mitad de los

entrevistados responsabiliza a los funcionarios permanentes del bajo desempeño del estado, mientras que prácticamente todos –incluyendo los líderes gubernamentales– asignan culpas a los políticos. Esto confirma las algunas intuiciones obtenidas a partir de los datos de las tablas 4 y 5: los líderes perciben más un problema de liderazgo y gerenciamiento en niveles superiores de la burocracia que uno de ejecución en niveles inferiores.

Medidas preferidas para mejorar la calidad de la administración pública

Las preguntas de la sección pasada fueron acompañadas por una acerca de las posibles formas de elevar la calidad administrativa del estado. Se les presentó a los entrevistados una lista de 6 medidas que han sido propuestas y se les pidió que las calificaran en una escala de “muy efectivas” (5 puntos) a “nada efectivas” (1 punto). En la tabla 7 se presentan los promedios (ordenados de mayor a menor para el total de la muestra) y las desviaciones estándar de dicha escala para cada sector.

El promedio más alto corresponde al aumento de la inversión en capacitación. Los incentivos ligados a objetivos y la descentralización de funciones hacia unidades más pequeñas del sistema federal obtienen promedios algo menores (cerca de 4, el puntaje correspondiente a la categoría “efectiva”). Un escalón por debajo aparece la subcontratación o concesión de funciones al sector privado. La reducción de la planta de personal o el aumento de salarios son las medidas con menos apoyo, aunque ambas superan levemente la nota intermedia de 3 (correspondiente a la categoría “algo efectiva”).

Tabla 7. Evaluación de la efectividad de 6 medidas para mejorar la calidad de la administración pública según sector al que pertenecen los encuestados

	Políticos y gobernantes	Empresarios	Sindicalistas	Consultores e intelectuales	Líderes de la sociedad civil	Total
Aumentar inversión en capacitación del personal	4,46 (0,72)	4,29 (0,62)	4,70 (0,66)	4,23 (0,54)	4,54 (0,52)	4,41 (0,65)
Otorgar incentivos ligados al cumplimiento de objetivos	4,19 (0,94)	4,27 (1,00)	3,90 (0,72)	3,84 (0,84)	4,06 (0,83)	4,12 (0,91)
Descentralizar funciones desde la nación hacia las provincias y municipalidades	3,92 (1,15)	3,97 (1,25)	4,10 (1,08)	3,63 (0,87)	4,28 (1,07)	3,97 (1,13)
Subcontratar o concesionar actividades al sector privado	3,54 (1,01)	4,05 (1,00)	2,44 (1,30)	3,47 (1,35)	3,44 (1,16)	3,56 (1,20)
Reducir la planta de personal	3,04 (1,37)	4,00 (1,17)	1,75 (1,35)	3,00 (1,41)	3,01 (1,13)	3,19 (1,44)
Aumentar el salario de los funcionarios	3,20 (1,17)	3,04 (1,24)	3,20 (1,01)	3,30 (1,19)	3,04 (1,24)	3,15 (1,17)
Casos (no ponderados)¹	39	43	8	15	11	119

Nota: las cifras son medias calculadas en base a la siguiente escala: muy efectiva=5, efectivas=4, algo efectiva=3, poco efectiva=2, nada efectiva=1. Las cifras entre paréntesis son desviaciones estándar.

1. Como no todas las medidas de la tabla fueron evaluadas por la misma cantidad de entrevistados (debido a diferentes cantidades de ns/nr en cada una de ellas), se indica la cantidad mínima de casos válidos utilizados para calcular las 6 medias de cada columna.

Las diferencias sectoriales más importantes que se detectan son las existentes entre empresarios y sindicalistas en términos de la subcontratación con el sector privado y la reducción de la planta de personal. Interesantemente, los líderes sindicales no evalúan el aumento del salario de los funcionarios en forma significativamente más favorable que los demás segmentos.

Todas las medidas presentadas por el cuestionario, entonces, fueron consideradas en mayor o menor medida efectivas para mejorar la calidad de la administración pública, aunque la capacitación fue bastante más valorada que la reducción de personal o el aumento de salarios.

Los roles del estado y el modelo de estado ideal

Con el objeto de obtener información sobre el tipo de estado preferido por los entrevistados se realizaron algunas preguntas las funciones que debería cumplir. En la tabla 8 se presentan los resultados de una de ellas, referida a la repartición de responsabilidades entre el estado y el sector privado en 9 áreas de interés público.

La construcción de viviendas y los servicios públicos son las áreas consideradas más propias del sector privado, seguidas por el crédito: no hay en estos tres temas porcentajes relevantes de entrevistados que le asignen al estado la principal responsabilidad. Al estado se le asigna algo más de responsabilidad en el tema de las jubilaciones, pero aún así la mayoría de las respuestas están del lado de la responsabilidad privada o compartida. En cuestiones de infraestructura,

investigación científica, salud y educación la mayoría de los líderes se inclinó por una responsabilidad compartida, con un cierto predominio privado en el primer caso y estatal en los dos últimos. La seguridad fue la única área que se atribuyó claramente al estado.

Tabla 8. Rol del estado y del sector privado en 9 áreas de interés público

	Totalmen- te estatal	Principal- mente estatal	Estatal y privada	Principalmen- te privada	Totalmen- te privada	NS	NR
Construcción de vivienda	1	3	33	25	37	1	1
Servicios públicos	2	2	28	32	35	1	0
Crédito	0	3	38	28	28	1	2
Jubilaciones	9	11	36	23	21	0	1
Infraestructura	5	15	46	20	14	0	1
Investigación Científica y tecnológica	7	12	65	12	4	0	1
Salud	6	25	57	9	2	0	1
Educación	6	23	65	5	1	0	0
Seguridad	56	32	10	1	1	0	1

Base: 130 casos.

Nota: las cifras representan porcentajes horizontales.

La tabla 9 presenta un análisis por sector de algunos de los resultados de la tabla 8. Dado que sería muy engorroso presentar el cruce correspondiente a las 9 áreas analizadas, sólo se presentan los resultados para 4 de particular representatividad: los servicios públicos, las jubilaciones, la educación y la seguridad. Además se presentan los resultados del Índice de estatismo-privatismo, que es un promedio no ponderado de las respuestas dadas en los 9 ítems. A la categoría "totalmente estatal" se le asignó el puntaje 1, a "principalmente estatal" el 2, y así hasta "totalmente privado", a la que corresponde el número 5. Así, las personas que tiendan a asignar más responsabilidades al sector privado tendrán puntajes más cercanos a 5 en el Índice (el valor real más alto es 4,33), mientras que los que hagan lo contrario obtendrán índices cercanos a 1 (el valor real más bajo es 1,67).

Tabla 9. Rol del estado y del sector privado en 4 áreas de interés público según sector al que pertenecen los encuestados

	Políticos y gobernantes	Empresarios	Sindicalistas	Consultores e intelectuales	Líderes de la sociedad civil	Total
Servicios públicos						
Total/principalmente estatal	7	2	12	-	-	5
Estatad y privada	32	17	53	24	25	28
Total/principalmente privada	61	81	35	77	75	67
Jubilaciones						
Total/principalmente estatal	26	2	50	19	15	20
Estatad y privada	45	15	50	31	62	36
Total/principalmente privada	29	83	-	50	23	44
Educación						
Total/principalmente estatal	37	15	59	28	15	29
Estatad y privada	61	78	41	61	77	65
Total/principalmente privada	2	8	-	11	8	6
Seguridad						
Total/principalmente estatal	95	83	89	94	79	88
Estatad y privada	5	15	11	6	14	10
Total/principalmente privada	-	2	-	-	7	2
Índice de estatismo-privat.						
Media (escala de 1 a 5) ¹	2,97	3,53	2,44	3,35	3,16	3,14
Desviación estándar	0,50	0,45	0,58	0,28	0,46	0,58
Casos (no ponderados)²	42	46	10	17	13	129

Nota: las cifras representan porcentajes verticales salvo cuando se indica que son medias, desviaciones estándar o casos.

1. Media del Índice de estatismo-privatismo (ver definición en el anexo III). Escala de 1 a 5 donde 1 significa máximo estatismo (el mínimo real de la escala es 1,67) y 5 máximo privatismo (el valor máximo real es 4,33).

2. Como no todos los ítems de la tabla fueron evaluados por la misma cantidad de entrevistados (debido a diferentes cantidades de ns/nr en cada una de ellas), se indica la cantidad mínima de casos válidos no ponderados utilizados para calcular las estadísticas de algunas de las celdas.

En la tabla 9 se agrupan, para facilitar la lectura de los datos, las categorías “totalmente estatal/privada” y “principalmente estatal/privada”. Los totales de la tabla son prácticamente iguales a los de la tabla 8, aunque están calculados sin tener en cuenta al pequeño porcentaje de entrevistados que no contestó cada pregunta. En los servicios públicos hay un amplio consenso privatista sólo alterado por la posición algo menos entusiasta de los líderes sindicales. Las jubilaciones, en cambio, están lejos de generar consenso: los sindicalistas muestran una posición predominantemente estatista, los políticos y los líderes de la sociedad civil apoyan mayoritariamente un sistema mixto, los consultores y técnicos son predominantemente privatistas, y casi todos los empresarios prefieren un sistema principal o totalmente estatal.

En educación los sindicalistas vuelven a ser los más estatistas. En general predominan las posiciones mixtas, con porcentajes relativamente altos de posturas más estatistas en el sector de los líderes políticos y en el de los consultores e intelectuales. Ningún sector muestra porcentajes altos de posturas privatistas en educación. La seguridad es consensualmente atribuida total o principalmente al estado.

El Índice de estatismo-privatismo promedio es de 3,14, es decir, levemente del lado del privatismo¹⁰. Consistentemente con la información presentada hasta aquí, el segmento más pro-estado es el de los sindicalistas, seguido por el de los políticos. Los más inclinados hacia dar responsabilidades al sector privado son los empresarios, y luego los intelectuales y consultores, con los líderes de la sociedad civil ocupando una posición muy cercana al promedio. La consideración de estas diferencias no debe hacer perder de vista el hecho de que las mismas no son muy grandes: entre los dos sectores más extremos, sindicalistas y empresarios, la distancia es de 1,09 puntos, en una escala cuyo rango es de 4 puntos.

Las opiniones acerca del tipo de estado preferido pueden expresarse en términos de las áreas públicas en que debería involucrarse pero también en términos del tipo de roles que se espera que cumpla. Se les leyó a los entrevistados una lista de actividades que el estado realiza o podría realizar, y se les pidió que expresaran si éste debería llevarlas a cabo o no. Los resultados se presentan en la tabla 10.

¹⁰ Debe tenerse presente que el valor promedio de este índice depende en parte de los ítems que se incluyen en el mismo. Así, por ejemplo, si se hubiesen considerado áreas como la seguridad exterior y la justicia, que sin duda hubieran generado respuestas abrumadoramente estatistas, el valor promedio del índice sería menor.

Tabla 10. Opinión sobre si el estado debería desempeñar ciertos roles según sector al que pertenecen los encuestados

	Políticos y gobernantes	Empresarios	Sindicalistas	Consultores e intelectuales	Líderes de La sociedad civil	Total
Promotor de la equidad social						
Si	100	80	100	94	93	92
No	-	10	-	7	-	4
Depende ¹	-	10	-	-	8	4
Mediador						
Si	88	70	100	69	79	81
No	7	20	-	25	7	13
Depende	5	10	-	6	14	7
Regulador de la actividad económica						
Si	63	46	100	56	62	62
No	12	46	0	17	31	24
Depende	24	7	0	28	8	15
Proveedor de subsidios a sectores económicos estratégicos						
Si	65	38	100	17	62	54
No	10	48	-	56	8	27
Depende	25	15	-	28	31	20
Prestador de servicios públicos						
Si	14	12	41	-	23	16
No	64	68	18	69	54	59
Depende	21	20	41	31	23	25
Empresario						
Si	10	-	12	-	-	5
No	88	95	59	100	85	88
Depende	2	5	29	-	15	8
Casos (no ponderados)²	41	45	10	17	14	128

Nota: las cifras representan porcentajes verticales salvo cuando se indica que son casos.

1. La opción "depende" no fue presentada a los entrevistados pero fue aceptada si éstos la expresaban.

2. Como no todos los ítems de la tabla fueron evaluados por la misma cantidad de entrevistados (debido a diferentes cantidades de ns/nr en cada una de ellas), se indica la cantidad mínima de casos válidos no ponderados utilizados para calcular los porcentajes de cada columna.

La equidad social es una función que genera consenso casi absoluto entre los líderes: entre el 80% y el 100% de cada sector considera que es un rol que el estado debería desempeñar. Algo similar, aunque con un poco menos de intensidad, ocurre con el rol de mediador. La regulación de la actividad económica, en cambio, genera menos apoyo y consenso. Un cuarto de la muestra la rechaza y un 15% adicional la condiciona. El 100% de los sindicalistas cree que es una función que el estado debe realizar, contra sólo un 46% de los líderes empresarios y un 56% de los intelectuales y consultores. Casi la mitad de los empresarios y un tercio de los líderes sociales creen que el estado no debe regular la economía. Aproximadamente un cuarto de los políticos y de los consultores condicionan esa función. El subsidio de sectores estratégicos (dejando a los entrevistados la interpretación de esta última expresión) tampoco genera consenso. Todos los

sindicalistas lo reclaman, mientras que alrededor de la mitad de los empresarios y consultores lo rechazan de plano. La función de provisión de servicios públicos no es considerada propia del estado por casi el 60% de los entrevistados, siendo los líderes sindicales los únicos que opinan diferente. El estado empresario es rechazado por casi el 90% de la muestra, con muy aislados apoyos entre sindicalistas y políticos.

Entre un 4% y un 25% de los entrevistados, dependiendo del ítem, no aceptó definirse categóricamente por un sí o un no. Aunque no se les leyó como opción, el cuestionario incluyó la respuesta “depende”, en previsión de que por lo menos algunos encuestados tenderían a dar respuestas del tipo “el estado debería regular los servicios públicos pero no otras actividades” o “el estado debería apoyar ciertos sectores con la condición de que los subsidios sean transparentes y temporarios”. A aquellos que eligieron la opción “depende” se les pidió que fundamentaran su respuesta.

El rol que generó más respuestas “depende” fue el de prestador de servicios públicos. En este caso los entrevistados tendieron a decir que “depende del caso”, “en algunos casos sí y en otros no”, etc. En particular se indicó que el estado debería hacerlo cuando la prestación privada no llega a ciertos sectores o cuando ciertas circunstancias sociales así lo requieren. En el caso de la provisión de subsidios a sectores estratégicos se reclama que se subsidie con cuidado y asegurándose de que se trate verdaderamente de un sector estratégico. La regulación de la actividad económica se condiciona al sector o rubro, o a que se trate de monopolios naturales.

Lo que parece surgir de las respuestas “depende” es que la intervención estatal debe darse en casos de falla de mercado (monopolios), cuando hay razones de bienestar o equidad social (acceso universal a los servicios públicos) y siempre que se pueda asegurar que esté basada en criterios técnicos y no en criterios políticos, como ser las *rent-seeking activities* de los integrantes la coalición distributiva.

Como una forma alternativa de aproximarse a las preferencias de los entrevistados respecto del estado se les preguntó qué modelo elegirían de entre los países que conoce. Las respuestas aparecen en la tabla 11. Casi un cuarto de los entrevistados se inclinaron por los Estados Unidos. El estado francés resultó el segundo más mencionado, con un 12%. Canadá sigue con un 9%. En un cuarto escalón aparecen varios otros estados Europeos (Alemania, Reino Unido y Suiza), junto con Chile y Nueva Zelanda. Otros países cuyos estados obtienen porcentajes relevantes de menciones son Suecia y España.

Tabla 11. Modelo de estado preferido de entre aquellos países que conoce (pregunta abierta) según sector al que pertenecen los encuestados

	Políticos y gobernantes	Empresarios	Sindicalistas	Consultores e intelectuales	Líderes de la sociedad civil	Total
Estados Unidos	21	28	-	41	31	24
Francia	14	12	20	6	8	13
Canadá	17	5	20	-	-	9
Alemania	5	7	20	-	8	7
Reino Unido	2	7	-	18	8	6
Chile	-	14	-	6	8	6
Nueva Zelanda	5	7	-	12	-	5
Suiza	5	7	-	6	-	5
Suecia	7	2	-	-	8	4
España	2	-	-	6	8	3
Otros	10	12	20	-	15	10
No existe ningún modelo	2	-	-	-	-	1
No sabe/no responde	10	-	20	6	8	7
Casos (no ponderados)	42	46	10	18	14	130

Nota: las cifras representan porcentajes verticales salvo cuando se indica que son casos.

Se detectan algunas tendencias claras en el análisis por sectores: los técnicos tienden a inclinarse por estados relativamente pequeños y liberales como los de Estados Unidos, Reino Unido y Nueva Zelanda, mientras que los sindicalistas tienden a escoger países con mayor desarrollo del estado benefactor, como Francia, Alemania y Canadá. Los empresarios se acercan más a la posición de los técnicos (la diferencia más interesante es su inclinación por Chile, el único país latinoamericano mencionado), en tanto que los políticos muestran una leve inclinación hacia estados benefactores como los ya mencionados y Suecia.

Los determinantes de la acción estatal

Resultaba importante para los objetivos de la investigación no sólo saber las opiniones de los encuestados sobre el estado argentino y sobre el tipo de estado ideal y las funciones que debería desempeñar, sino también averiguar qué percepción tienen acerca de los motivos de la acción estatal. ¿Qué factores explican en mayor medida las decisiones del estado? ¿qué influencia tienen las corporaciones?

La tabla 12 presenta 6 posibles factores explicativos de las políticas adoptadas por el estado, ordenados del más al menos influyente según la opinión de los entrevistados. De entre ellos la acción de los *lobbies* fue considerado el más importante. La improvisación ocupa un cercano segundo lugar. Siguen, en una posición intermedia, la visión estratégica y la ideología de los políticos. Cierran la lista, con bastante menor relevancia, la planificación técnica y las demandas de la ciudadanía. Se percibe, entonces, un estado permeable a las demandas sectoriales pero lejano a los intereses de los ciudadanos y que improvisa más de lo que planifica.

Tabla 12. Importancia de los factores que influyen en las políticas estatales según sector al que pertenecen los encuestados

	Políticos y gobernantes	Empresarios	Sindicalistas	Consultores e intelectuales	Líderes de la sociedad civil	Total
Acción de los lobbies						
Influyen en gran medida	51	49	82	44	54	54
Influyen en alguna medida	46	49	18	56	46	44
No influyen	2	2	-	-	-	2
Improvisación						
Influye en gran medida	44	59	39	63	39	50
Influye en alguna medida	39	42	50	38	62	43
No influye	17	-	11	-	-	7
Visión estratégica de los políticos						
Influye en gran medida	32	40	71	17	46	39
Influye en alguna medida	51	30	12	44	46	38
No influye	17	30	18	39	8	23
Ideología de los políticos						
Influye en gran medida	38	38	29	39	39	37
Influye en alguna medida	43	41	29	44	54	42
No influye	20	21	41	17	8	22
Planificación técnica						
Influye en gran medida	26	18	39	24	23	25
Influye en alguna medida	55	63	50	53	77	59
No influye	19	20	11	24	-	17
Demandas de la ciudadanía						
Influye en gran medida	24	18	29	12	17	21
Influye en alguna medida	61	65	59	71	67	64
No influye	15	18	12	18	17	16
Casos (no ponderados)	42	46	10	18	14	130

Nota: las cifras representan porcentajes verticales salvo cuando se indica que son casos.

De un listado dado de 10 actores políticamente relevantes (tabla 13), los entrevistados identificaron a los medios de comunicación y los organismos internacionales de crédito como los dos más influyentes sobre las decisiones de política pública. Recién en los dos siguientes lugares aparecen las clásicas fuerzas del capital (empresarios) y del trabajo (sindicatos), aunque con una ventaja considerable para el primero. En posición similar a la de los sindicatos se encuentra al Congreso de la Nación y a la administración pública que, pese a que formalmente tienen a su cargo la aprobación y ejecución, respectivamente, de las principales políticas públicas, ocupan un lugar bastante rezagado. Todavía menos influencia se les atribuye a la ciudadanía y a la Iglesia Católica, que sólo superan a las ONGs y las Fuerzas Armadas, las que de acuerdo a la percepción de los líderes entrevistados casi no tienen influencia sobre el diseño e implementación de políticas públicas.

Es destacable el hecho de que los primeros lugares en el ranking de influencia pública sean ocupados por actores no tradicionales, los medios y los organismos internacionales de crédito, mientras que, con la excepción del empresariado, las corporaciones tradicionales –sindicatos, Iglesia y Fuerzas Armadas–, se perciben como poco influyentes. El caso de los militares es particularmente ilustrativo de los profundos cambios que nuestro sistema político ha experimentado en las últimas décadas. No cabe duda de que un relevamiento similar en los 70 hubiera atribuido una enorme capacidad de influencia a las Fuerzas Armadas. Hoy son percibidas como políticamente irrelevantes.

Tabla 13. Influencia de actores sociales seleccionados sobre el diseño e implementación de políticas públicas

	Mucho	Bastante	Algo	Poco	Nada	NS	NR
Los medios de comunicación	45	41	12	1	1	0	1
Los organismos internacionales de crédito	43	36	17	4	0	0	0
Los empresarios	35	38	21	5	0	0	1
Los sindicatos	13	33	37	15	1	0	1
El Congreso de la Nación	11	31	37	18	2	0	0
La administración pública	9	40	28	14	10	0	0
La ciudadanía	3	20	36	34	5	0	1
La Iglesia Católica	3	19	47	29	1	0	1
Las ONGs	0	6	39	37	18	0	1
Las Fuerzas Armadas	0	0	17	58	24	0	1

Base: 130 casos.

Nota: las cifras representan porcentajes horizontales.

La tabla 14 presenta el porcentaje de cada uno de los 5 sectores dirigentes analizados que opinó que un cierto actor influye “mucho” o “bastante”. Un patrón discernible es que cada sector tiende a atribuirse menos influencia de la que le atribuye el resto de los entrevistados. Dos de las cifras en negrita muestran como empresarios y sindicalistas dicen tener mucha menos influencia que la que les asignan los demás líderes. Las otras dos cifras resaltadas muestran algo similar: los intelectuales, entre quienes se incluye a tres representantes de instituciones financieras internacionales y a otras personas vinculadas con ellas, otorgan menor relevancia a los organismos internacionales de crédito. De la misma manera, los líderes de la sociedad civil, entre los que se cuentan tres obispos, juzgan a la Iglesia menos influyente que los demás sectores. El único caso en el que se observa una tendencia en sentido contrario es el de las ONGs: los líderes de la sociedad civil les asignan más influencia que los demás entrevistados. También es destacable que, a pesar de que entre los líderes políticos y gubernamentales hay 12 legisladores y varios ex legisladores, no hay en este sector de la dirigencia una subestimación de la influencia del Congreso.

Tabla 14. Porcentaje que contestó que cada actor influye mucho o bastante según sector al que pertenecen los encuestados

	Políticos y gobernantes	Empresarios	Sindicalistas	Consultores e intelectuales	Líderes de la sociedad civil	Total
Los medios de comunicación	88	83	100	76	83	86
Los organismos internacionales de crédito	83	69	100	50	100	78
Los empresarios	88	44	100	77	83	74
La administración pública	42	54	53	41	62	49
Los sindicatos	33	55	29	67	54	46
El Congreso de la Nación	46	46	18	41	57	43
La ciudadanía	27	29	18	12	18	24
La Iglesia Católica	29	12	39	24	8	22
Las ONGs	10	2	-	6	15	6
Las Fuerzas Armadas	-	-	-	-	-	-
Casos (no ponderados)	42	46	10	18	14	130

Nota: las cifras representan los porcentajes sumados de las respuestas "influye mucho" e "influye bastante", salvo cuando se indica que son casos.

Para aquellos actores cuyos miembros no están representados en la muestra o lo están en muy escasa medida, las evaluaciones tienden a ser más homogéneas. Así, por ejemplo, no hay grandes diferencias en términos de la relevancia que se les asigna a los medios de comunicación (recuérdese que los periodistas fueron deliberadamente excluidos de la muestra; ver sección 1.1.).

Como ya se observó en variables anteriores, aquí las posiciones más claramente diferenciadas vuelven a ser las de los intelectuales y sindicalistas. Los primeros tienden a atribuir niveles similares de importancia a varios actores, a dar evaluaciones más o menos conservadoras sobre la influencia de medios, organismos financieros y empresarios, y a percibir a los sindicatos como bastante poderosos. Los líderes gremiales, en cambio, asignan mucha influencia a medios, organismos internacionales y empresarios, y escasa influencia a sus propias organizaciones.

2.3. La reforma económica

El cuestionario incluyó algunas preguntas tendientes a explorar la visión de los líderes sobre el proceso de reformas económicas encarado por el gobierno de Menem desde que asumió el cargo en 1989. En particular se indagó, mediante preguntas abiertas, sobre cuáles se consideraban los logros principales de esas reformas y cuáles sus tareas pendientes. En cada caso se registraron hasta tres respuestas por entrevistado.

La tabla 15 muestra que la estabilidad monetaria y macroeconómica es considerada como el principal logro por la gran mayoría de los encuestados (71% mencionó este tema en primer lugar, y 92% en alguno de los 3 primeros lugares). En un alejado segundo lugar aparecen las respuestas

vinculadas al tamaño y reforma del estado, especialmente las privatizaciones. Es destacable que, aunque con relativamente pocas menciones, el tercer tema en la lista pertenece al área de la política exterior y no de la economía: un sector de los líderes considera que las reformas económicas contribuyeron a una mejor inserción del país en el mundo. Los dos temas que siguen están relacionados en la medida en que destacan diferentes aspectos del proceso de liberalización: la apertura del mercado y la desregulación de la economía. Quizás uno de los datos más llamativos de la tabla es que las referencias al crecimiento económico y el aumento de la inversión reciben relativamente pocas menciones. Dado que las reformas produjeron, entre 1991 y 1994, el primer ciclo de crecimiento económico robusto y sostenido desde la década de los 70, resulta extraño que no haya habido más referencias a este tema. Es posible que este resultado sea producto del contexto más recesivo de la segunda mitad de los 90 y, en particular, de que el trabajo de campo fue realizado a mediados de 1999, prácticamente en el peor momento de la crisis posterior de la devaluación brasilera.

Tabla 15. Logros principales del programa de reformas económicas implementado por el gobierno nacional desde 1989 a 1999 (pregunta abierta; primera mención y tres primeras menciones sumadas)

	1era. mención	3 primeras menciones
Estabilidad económica/eliminar inflación/convertibilidad	71	92
Privatizaciones/reducción tamaño del estado	13	44
Inserción mundial del país/política exterior	5	22
Apertura mercado/instalar competencia	2	22
Desregulación de la economía	2	10
Inversiones/crecimiento económico/productividad	1	15
Reforma impositiva/fiscal	1	9
Transparencia/control de la corrupción	1	6
Fortalecimiento institucional y/o democrático	1	6
Reforma sistema jubilatorio	-	3
Integración regional	-	3
Otros	2	12
No responde	1	1
Total	100	*

* Suma más de 100% por tratarse de una pregunta de respuestas múltiples (hasta tres por entrevistado).

Base: 130 casos.

El análisis de las respuestas sobre el principal logro de las reformas según sector dirigenal muestra que todos ellos priorizan la estabilidad de precios (y la macroeconómica) pero con algunas diferencias en torno de los demás temas (tabla 16). Empresarios y consultores, por ejemplo, mencionan más a las privatizaciones y la desregulación que el resto de los sectores. Se observa también que los consultores son los únicos que mencionaron al crecimiento económico como el principal logro de las reformas económicas.

Tabla 16. Logros principales del programa de reformas económicas implementado de 1989 a 1999 (pregunta abierta; primera mención) según sector al que pertenecen los encuestados

	Políticos y gobernantes	Empresarios	Sindicalistas	Consultores e intelectuales	Líderes de la sociedad civil	Total
Estabilidad de precios y macroeconómica	81	71	78	56	57	71
Privatizaciones/reducción del tamaño del estado	2	20	11	22	14	13
Inserción mundial del país	7	2	-	-	14	5
Apertura mercado/mayor competencia	-	2	-	-	7	2
Desregulación de la economía	-	5	-	6	-	2
Inversiones/crecimiento	-	-	-	11	-	1
Otros	7	-	11	6	7	5
No responde	2	-	-	-	-	1
Casos (no ponderados)	42	46	10	18	14	130

Nota: las cifras representan porcentajes verticales salvo cuando se indica que son casos.

Las tareas pendientes del programa de reformas, presentadas en la tabla 17, fueron agrupadas en sociales, institucionales, económicas, de empleo y de corrupción o transparencia. No hay aquí, como ocurría con los logros, un tema claramente predominante, aunque si a los sociales se les agrega el tema del desempleo se obtienen casi la mitad de las respuestas en primer lugar. A los problemas sociales le siguen los institucionales (como el fortalecimiento de la justicia y los entes reguladores) y los económicos (por ejemplo el logro del equilibrio fiscal y de un crecimiento sostenido), casi con igual número de menciones.

Tabla 17. Tareas pendientes del programa de reformas económicas implementado por el gobierno nacional desde 1989 a 1999 (pregunta abierta; primera mención y tres primeras menciones sumadas)

	1era. mención	3 primeras menciones
Sociales (seguridad social/equidad/pobreza/salud/educación/seguridad)	35	84
Institucionales (fortalecimiento del estado y de su rol regulador/mejora de la justicia/mecanismos de control/relación Nación-Provincias)	25	63
Económicas (equilibrio fiscal/disminución del gasto público/lucha contra la evasión/crecimiento/reducción del riesgo país/infraestructura)	24	58
Empleo (reforma o flexibilización laboral/disminución del desempleo)	11	33
Problemas de corrupción/transparencia	4	8
Otros	1	5
No sabe/no responde	1	1
Total	101	*

* Suma más de 100% por tratarse de una pregunta de respuestas múltiples (hasta tres por entrevistado).

Base: 130 casos.

La tabla 18 indica que políticos y líderes de la sociedad civil están más preocupados por los temas sociales que el promedio. Los sindicalistas enfatizan el tema del desempleo y los consultores e intelectuales los problemas institucionales.

Tabla 18. Tareas pendientes del programa de reformas económicas implementado de 1989 a 1999 (primera mención) según sector al que pertenecen los encuestados

	Políticos y gobernantes	Empresarios	Sindicalistas	Consultores e intelectuales	Líderes de la sociedad civil	Total
Sociales	43	26	28	28	46	35
Institucionales	19	29	11	39	31	25
Económicas	33	26	11	22	8	24
Empleo	-	14	39	6	8	11
Problemas de corrupción	2	5	-	-	8	4
Otros	-	-	11	-	-	1
No sabe/no responde	2	-	-	6	-	1
Casos (no ponderados)	42	46	10	18	14	130

Nota: las cifras representan porcentajes verticales salvo cuando se indica que son casos.

Dada la existencia de un debate sobre la supuesta impopularidad de las políticas ortodoxas de estabilización y reforma estructural y sobre la posibilidad de implementarlas en contextos democráticos, en los cuales los votantes y grupos sociales pueden oponerse a ellas y eventualmente detenerlas, resultaba particularmente relevante conocer la opinión de los encuestados sobre el tema. Una clara mayoría consideró que las reformas significaron para el gobierno más beneficios que costos políticos. Un tercio adicional manifestó que beneficios y costos fueron de aproximadamente la misma magnitud, mientras que sólo un 9% dijo que los costos políticos fueron mayores a los beneficios. Hay importantes diferencias por sector: empresarios y consultores/intelectuales son los más convencidos de las bondades políticas de las reformas. Los sindicalistas y líderes sociales son los que más enfatizan los costos. Aún así hay en estos grupos más entrevistados que opinan que los beneficios superan a los costos que lo contrario. Los líderes políticos ocupan una posición intermedia.

Tabla 19. Balance entre costos y beneficios políticos de las reformas económicas según sector al que pertenecen los encuestados

	Políticos y gobernantes	Empresarios	Sindicalistas	Consultores e intelectuales	Líderes de la sociedad civil	Total
Las reformas económicas generaron...						
Más beneficios que costos políticos	46	76	29	72	29	56
Beneficios y costos políticos similares	44	20	53	11	50	34
Más costos que beneficios políticos	10	5	18	6	14	9
No sabe/No responde	-	-	-	11	7	2
Casos (no ponderados)	42	46	10	18	14	130

Nota: las cifras representan porcentajes verticales salvo cuando se indica que son casos.

Estos datos muestran, entonces, que hay un consenso bastante amplio en el sentido de que las reformas económicas no sólo no representaron un alto costo político para el gobierno que las implementó, sino que contribuyeron a generar apoyos sociales al mismo.

2.4. El proceso de privatizaciones

Esta sección presenta los resultados de una serie de preguntas sobre el proceso de privatización de empresas estatales llevado a cabo fundamentalmente en la primera mitad de la década del 90, durante la cual pasaron al sector privado prácticamente todas las *utilities* (teléfonos, electricidad, gas, agua potable), empresas de transporte (aerolíneas, ferrocarriles, puertos) y empresas siderúrgicas y petroleras, además de otras funciones estatales que no dieron origen a empresas públicas, como la construcción y mantenimiento de rutas y la administración del sistema previsional.

En la tabla 20 se presentan los resultados de dos preguntas: una sobre la opinión que los entrevistados tenían sobre el efecto que las privatizaciones tendrían sobre el desarrollo del país antes de que las mismas se realizaran, y otra sobre como evalúan ese efecto ahora que ya han ocurrido. Se observa que había expectativas muy favorables antes de que las privatizaciones ocurrieran. Prácticamente ningún entrevistado sostenía opiniones contrarias a las privatizaciones con la excepción de un grupo relativamente reducido de sindicalistas (que es el único grupo sin opiniones a priori abrumadoramente positivas).

Tabla 20. Opinión sobre el efecto de las privatizaciones sobre el desarrollo del país antes y después de realizadas según sector al que pertenecen los encuestados

	Políticos y gobernantes	Empresarios	Sindicalistas	Consultores e intelectuales	Líderes de la sociedad civil	Total
Expectativas antes de las privatizaciones...						
Muy buenas	29	73	12	53	46	46
Buenas	39	17	41	41	46	34
Regulares	20	-	12	6	-	8
Malas	7	7	18	-	7	8
Muy malas	0	-	18	-	-	3
No sabe/No responde	5	2	-	-	-	2
Opinión a posteriori de realizadas las privatizaciones...						
Muy buenas	20	56	-	41	36	33
Buenas	39	34	18	47	29	35
Regulares	27	10	53	6	21	21
Malas	12	-	12	6	14	7
Muy malas	-	-	18	-	-	3
No sabe/No responde	2	-	-	-	-	1
Casos (no ponderados)	42	46	10	18	14	130

Nota: las cifras representan porcentajes verticales salvo cuando se indica que son casos.

La segunda parte de la tabla indica una moderada disminución en la proporción de entrevistados con opiniones positivas, los que pasan a engrosar las opiniones regulares, pero no negativas. Es decir que las expectativas iniciales se vieron en buena medida satisfechas. El sector donde la diferencia entre las expectativas positivas a priori y la opinión a posteriori es más marcada es el de los líderes sociales.

Estos datos indican que las numerosas polémicas en torno de la forma en que fueron realizadas las privatizaciones (entre otras críticas se señalaron problemas de corrupción, monopolios legales, marcos regulatorios imprecisos, etc.) no parecen haber afectado significativamente la opinión de los líderes sobre el tema sustantivo. El cuestionario indagó específicamente sobre el modo en que se llevaron a cabo las privatizaciones. Los resultados de esta pregunta se presentan en la siguiente tabla. Lo que allí se revela es que aunque las opiniones no son tan positivas como las vertidas sobre las privatizaciones en sí mismas, todavía hay más evaluaciones favorables que desfavorables: la gran mayoría de los entrevistados cree que las privatizaciones fueron hechas bien o regular, y sólo un 17% cree que fueron hechas mal o muy mal. Los empresarios seguidos de los líderes sociales son los grupos que mejor opinión tienen de los procedimientos utilizados, mientras que los sindicalistas son los más críticos. Los políticos también expresan una visión relativamente crítica, mientras que entre los consultores e intelectuales hay bastante heterogeneidad. Las opiniones básicamente favorables a las privatizaciones que mostraba la tabla 20, entonces, se deben en parte a que en general la dirigencia no cree que haya habido grandes problemas en la forma en que fueron hechas. Al interpretar estos resultados debe tenerse en cuenta que los entrevistados están, implícitamente, emitiendo una opinión "promedio" sobre un

proceso que ha sido muy variado: ha habido desde privatizaciones fuertemente criticadas y cuestionadas (como la de Aerolíneas Argentinas) hasta otras que se han constituido, incluso internacionalmente, en ejemplos de transparencia y eficiencia (como las de el sector eléctrico o YPF).

Tabla 21. Opinión sobre la forma en que fueron realizadas las privatizaciones según sector al que pertenecen los encuestados

	Políticos y gobernantes	Empresarios	Sindicalistas	Consultores e intelectuales	Líderes de la sociedad civil	Total
Muy buena	5	15	-	11	8	8
Buena	27	54	18	28	54	37
Regular	39	29	53	39	23	36
Mal	15	2	18	17	15	12
Muy mal	10	-	12	-	-	5
No sabe/No responde	5	-	-	6	-	3
Casos (no ponderados)	42	46	10	18	14	130

Nota: las cifras representan porcentajes verticales salvo cuando se indica que son casos.

Para indagar más diferenciadamente sobre las privatizaciones sin someter a los encuestados a la engorrosa tarea de evaluarlas una por una, se les formularon dos preguntas abiertas sobre las privatizaciones mejor y peor hechas. Entre las primeras sobresalen (primeras dos columnas de la tabla 22) las privatizaciones en el sector energía y gas (básicamente producción, transporte y distribución de electricidad), seguidas por las de telecomunicaciones y del sector petrolero (fundamentalmente YPF). Ninguna otra privatización recoge un porcentaje importante de menciones

Tabla 22. Privatizaciones mejor y peor hechas (preguntas abiertas; primera mención y cuatro primeras menciones sumadas)

	Mejor hechas		Peor hechas	
	1era. mención	4 primeras menciones	1era. mención	4 primeras menciones
Energía/Electricidad/Gas	34	68	2	11
Telecomunicaciones	24	37	15	24
YPF/Petróleo	23	40	5	10
Infraestructura (rutas, puertos, aeropuertos, etc.)	1	8	6	21
Aerolíneas Argentinas	1	3	48	70
AFJPs	1	2	-	1
Bancos	-	2	1	1
Ninguna	3	7	5	11
Todas	1	1	2	6
Otras	6	23	11	31
No sabe/no responde	6	6	5	5
Total	100	*	100	*

* Suma más de 100% por tratarse de una pregunta de respuestas múltiples (hasta cuatro por entrevistado).
Base: 130 casos.

La gran mayoría de los entrevistados cree que la peor privatización (últimas dos columnas de la tabla 22) ha sido la de Aerolíneas Argentinas. Hay un porcentaje relativamente importante de menciones para las telecomunicaciones y la infraestructura (básicamente por el tema de los peajes). Muy pocos entrevistados mencionan las privatizaciones en los sectores de electricidad y petróleo, con lo cual éstos se constituyen claramente en los mejor evaluados. Lo contrario ocurre con Aerolíneas Argentinas. La privatización de ENTEL resulta más polémica (ya que hay una proporción importante de entrevistados que la considera la mejor, y otro grupo no pequeño que cree que fue la peor).

El análisis de las mejores privatizaciones según sector dirigencial presentado en la tabla 23 muestra un comportamiento algo atípico de los sindicalistas, quienes no mencionan al sector eléctrico y, en cambio, ponderan en mayor medida que los demás líderes la privatización de la telefonía. Además son los únicos líderes que muestran un porcentaje no despreciable de respuestas "ninguna". Los consultores e intelectuales, por su parte, son los más favorables a lo hecho con las empresas de electricidad y los que menos mencionan al sector de telecomunicaciones. Es también el único sector de la dirigencia que en alguna medida cree que "todas" las privatizaciones fueron bien hechas.

Tabla 23. Privatizaciones mejor hechas (pregunta abierta; primera mención) según sector al que pertenecen los encuestados

	Políticos y gobernantes	Empresarios	Sindicalistas	Consultores e intelectuales	Líderes de la sociedad civil	Total
Energía/Electricidad/Gas	37	37	-	53	31	34
Telecomunicaciones	24	22	41	18	23	24
YPF/Petróleo	20	29	29	12	15	23
Ninguna	5	-	12	-	-	3
Todas	-	-	-	12	-	1
Otras	7	9	18	-	15	9
No sabe/No responde	7	2	-	6	15	6
Casos (no ponderados)	42	46	10	18	14	130

Nota: las cifras representan porcentajes verticales salvo cuando se indica que son casos.

El mismo tipo de análisis realizado para las peores privatizaciones no arroja grandes diferencias de sector a sector. Sólo se destaca el alto porcentaje correspondientes a la privatización de ENTEL entre los líderes políticos y el alto nivel de no respuesta entre los líderes de la sociedad civil.

Tabla 24. Privatizaciones peor hechas (pregunta abierta; primera mención) según sector al que pertenecen los encuestados

	Políticos y gobernantes	Empresarios	Sindicalistas	Consultores e intelectuales	Líderes de la sociedad civil	Total
Aerolíneas Argentinas	43	52	39	56	46	48
Telecomunicaciones	25	5	17	6	15	15
Infraestructura	8	10	-	6	-	6
YPF/Petróleo	8	5	11	-	-	5
Ninguna	3	5	11	6	-	5
Todas	-	-	11	6	-	2
Otras	10	19	11	22	8	14
No sabe/No responde	5	5	-	-	31	5
Casos (no ponderados)	42	46	10	18	14	130

Nota: las cifras representan porcentajes verticales salvo cuando se indica que son casos.

La tabla 25 muestra la lista de los supuestos beneficios de las privatizaciones que les fue leída a los entrevistados, e indica si éstos creen que dichos beneficios se materializaron en el caso argentino. Una muy amplia mayoría cree que la calidad de los servicios ha mejorado mucho o bastante. Una proporción apenas inferior opina que ha habido un sustancial aumento de las inversiones en los sectores económicos privatizados. Otros dos beneficios asociados con la venta de empresas públicas, la reducción en el tamaño del estado y la mayor eficiencia en la asignación

de recursos, son percibidos como que se han logrado, aunque con un consenso algo menor que en los dos primeros casos. Los beneficios que menos entrevistados perciben como logrados son la disminución del gasto público y la creación de mercados más competitivos y transparente. Este último ítem es el único que no logra llegar al 50% de respuestas entre las categorías “mucho” y “bastante”.

Tabla 25. “¿En qué medida los siguientes supuestos beneficios de las privatizaciones se han materializado en el caso argentino: mucho, bastante, algo, poco o nada?”

	Mucho + Bastante	Mucho	Bas- tante	Algo	Poco	Nada	NS	NR
Mejora en la calidad de los servicios prestados	86	51	35	8	5	0	1	1
Mayores inversiones en las áreas privatizadas	82	48	34	10	6	1	0	1
Reducción en el tamaño del Estado	71	45	26	12	10	5	1	1
Mejora de la eficiencia en la asignación de recursos	68	41	27	16	6	6	2	1
Disminución del gasto público	58	38	20	7	18	15	1	1
Creación de mercados más competitivos y transparentes	46	16	30	25	16	11	1	1

Base: 130 casos.

Nota: las cifras representan porcentajes horizontales.

Los datos de la tabla 26 muestran que empresarios y consultores/intelectuales son los que en mayor medida creen que ha mejorado la calidad de los servicios públicos, que ha habido más inversiones en los sectores privatizados, que se ha mejorado la asignación de recursos y que las privatizaciones han contribuido a disminuir el gasto público. En todos estos rubros los menos convencidos son los sindicalistas, y los líderes políticos y los sociales generalmente se ubican en posiciones intermedias. Las cosas son algo diferentes en el ítem “reducción en el tamaño del estado”: allí los sindicalistas son los más convencidos (quizás porque asocian este concepto con reducción de personal). Los empresarios también son el grupo que en mayor medida cree que las privatizaciones han contribuido a crear mercados más transparentes y competitivos, pero aquí los que más se alejan de esa posición no son los líderes gremiales, sino los sociales y los políticos.

Tabla 26. Porcentaje que contestó que los beneficios de las privatizaciones se han materializado en el caso argentino mucho o bastante según sector al que pertenecen los encuestados

	Políticos y gobernantes	Empresarios	Sindicalistas	Consultores e intelectuales	Líderes de la sociedad civil	Total
Mejora en la calidad de los servicios	78	100	70	94	85	86
Mayores inversiones	86	88	53	88	79	82
Reducción en el tamaño del Estado	66	71	82	72	69	71
Mejora de la eficiencia en la asignación de recursos	54	88	41	82	69	68
Disminución del gasto público	52	64	38	78	46	58
Creación de mercados más competitivos	37	65	41	47	23	46
Casos (no ponderados)	42	46	10	18	14	130

Nota: las cifras representan los porcentajes sumados de las respuestas "mucho" y "bastante", salvo cuando se indica que son casos.

Dado que, nuevamente, las evaluaciones de las dos tablas anteriores corresponden a "promedios" que los entrevistados realizan mentalmente para un fenómeno muy complejo –de muchas partes-, como las privatizaciones-, se formularon varias preguntas para evaluar sector por sector por lo menos uno de los ítems relevado en general (la calidad de los servicios prestados). Los resultados se exhiben en la tabla 27.

Tabla 27. "¿Usted diría que luego de las privatizaciones la prestación de los siguientes servicios públicos ha...?"

	Mejorado mucho	Mejorado algo	Ni mejorado ni empeorado	Empeorado algo	Empeorado mucho	NS	NR
Telecomunicaciones	84	13	1	0	0	1	1
Electricidad	55	33	10	0	0	1	1
Gas de red	53	28	15	1	0	3	1
Rutas con peaje	45	41	8	1	2	1	2
Agua potable	33	41	21	2	0	4	1
Jubilaciones y pensiones	24	27	26	7	8	8	1
Transporte público	12	55	19	4	3	5	2

Base: 130 casos.

Nota: las cifras representan porcentajes horizontales.

Antes de analizar los datos de esta tabla debe advertirse que la interpretación de los mismos supone considerar el punto de partida. En efecto, si un cierto servicio público era muy deficiente bajo órbita estatal, tiene más espacio para mejorar. Inversamente, si una cierta empresa estatal prestaba servicios de buena calidad, es más improbable que la gestión privada haya logrado grandes mejoras. Desde este punto de vista quizás no debería sorprender que las telecomunicaciones sean claramente el servicio público considerado como el que más mejoró

desde su privatización. Prácticamente todos los entrevistados creen que han mejorado, y el 84% cree que han mejorado mucho. Las evaluaciones son abrumadoramente positivas también para la electricidad y el gas de red, sólo que en esos sectores se percibe la mejora con una intensidad algo menor (lo que se refleja en menos “mejoró mucho” y más “mejoró algo”). Algo similar ocurre con la concesión de rutas con sistema de peaje. Aunque todavía con evaluaciones básicamente positivas, se percibe que la producción y distribución de agua potable ha mejorado en menor medida. Cierran la tabla el sistema de AFJPs y el transporte público. Ambos tienen un porcentaje de respuestas neutras y de no respuestas importante, y una proporción de respuestas positivas todavía mayoritaria pero menor que los demás sectores.

La tabla 28 muestra que empresarios y consultores consideran, en mayor medida que el promedio, que ha habido mejoras en telecomunicaciones, electricidad y gas de red, mientras que los sindicalistas son los que en menor medida lo creen (también en los transportes públicos y las AFJPs). Las rutas por peaje generan una situación distinta, con relativamente alto apoyo empresario y sindical, y con posturas más críticas por parte de los técnicos y los políticos. Estos últimos también resultan poco entusiastas respecto del sistema de jubilaciones privadas.

Tabla 28. Porcentaje que contestó que luego de las privatizaciones la prestación de los siguientes servicios ha mejorado mucho según sector al que pertenecen los encuestados

	Políticos y gobernantes	Empresarios	Sindicalistas	Consultores e intelectuales	Líderes de la sociedad civil	Total
Telecomunicaciones	83	90	59	89	85	84
Electricidad	52	66	12	71	62	55
Gas de red	37	71	41	59	46	53
Rutas con peaje	32	60	50	29	54	45
Agua potable	22	44	29	33	31	33
Jubilaciones y pensiones	10	51	-	18	17	24
Transporte público	18	12	-	11	17	12
Casos (no ponderados)	42	46	10	18	14	130

Nota: las cifras representan los porcentajes de la respuesta “ha mejorado mucho”, salvo cuando se indica que son casos.

Los datos de las tres tablas siguientes reflejan la actitud de los entrevistados respecto de planteos que han sido formulados en el sentido de anular, revisar y/o investigar los procesos de privatización. En efecto, más allá de un alto consenso político (claramente reflejado en esta encuesta) y social (según muestran sondeos de opinión pública) sobre la bondad de las privatizaciones, se han realizado muchos cuestionamientos a la transparencia y calidad técnica de los procedimientos de privatización. La tabla 29 muestra que ningún entrevistado alienta anular las privatizaciones, pero el 43% estaría de acuerdo con algún tipo de renegociación de los contratos de concesión. La gran mayoría de los sindicalistas y la mitad de los políticos y líderes de la sociedad civil apoyan esta idea. Los consultores e intelectuales son algo más reticentes a una renegociación, mientras que prácticamente el 80% de los empresarios la rechazan.

Tabla 29. Posición frente a las alternativas de anular las privatizaciones, renegociar algunos contratos perjudiciales para el país o respetar los contratos como están, según sector al que pertenecen los encuestados

	Políticos y gobernantes	Empresarios	Sindicalistas	Consultores e intelectuales	Líderes de la sociedad civil	Total
Anular las privatizaciones	-	-	-	-	-	-
Renegociar los contratos de concesión	46	22	82	41	54	43
Respetar los contratos	51	78	18	59	46	56
No sabe/no responde	2	-	-	-	-	1
Casos (no ponderados)	42	46	10	18	14	130

Nota: las cifras representan porcentajes verticales salvo cuando se indica que son casos.

Hay gran consenso entre los líderes en el sentido de investigar las supuestas irregularidades del proceso de privatizaciones (tabla 30). Todos los sindicalistas y la gran mayoría de los líderes políticos, empresarios y sociales apoyan ese tipo de acción, mientras que entre los consultores e intelectuales esa mayoría es menos intensa.

Tabla 30. Posición sobre si deberían investigarse las supuestas irregularidades cometidas en las privatizaciones o si sería mejor no hacerlo, según sector al que pertenecen los encuestados

	Políticos y gobernantes	Empresarios	Sindicalistas	Consultores e intelectuales	Líderes de la sociedad civil	Total
Debería investigarse	78	83	100	53	77	79
Sería mejor no investigar	12	17	-	35	15	16
No sabe/no responde	10	-	-	12	8	6
Casos (no ponderados)	42	46	10	18	14	130

Nota: las cifras representan porcentajes verticales salvo cuando se indica que son casos.

Las posiciones de los líderes en términos de las alternativas planteadas en la tabla 31 exhiben un cierto grado de polarización: las dos categorías extremas son las que reciben más menciones. Más de un tercio cree que si el gobierno renegociara las condiciones de privatización perdería respaldo empresario masivamente (los líderes empresarios son los que más adoptan esta posición, pero en todos los demás sectores hay porcentajes también importantes). Un 26%, en cambio, cree que la renegociación generaría apoyo empresario (salvo, claro, el de las empresas afectadas). Esta alternativa es elegida por la mitad de los sindicalistas pero sólo por el 17% de los empresarios.

Debe notarse, más allá de los matices sectoriales, que la mayoría de los líderes no cree que habría gran pérdida de apoyo empresario en un escenario de renegociación. En efecto, las tres alternativas que plantean tal apoyo no se alteraría o incluso aumentaría (todas las categorías

menos la primera en la tabla 31) suman el 54% de las respuestas (y un no despreciable 34% de los empresarios). También debe destacarse el nivel relativamente alto de no respuesta a la pregunta: al 10% entrevistados les resulta difícil evaluar cual sería la reacción empresarial frente a una iniciativa gubernamental de renegociación.

Tabla 31. Opinión sobre lo que ocurriría si el gobierno renegociara las condiciones de transferencia de las empresas privatizadas, según sector al que pertenecen los encuestados

	Políticos y gobernantes	Empresarios	Sindicalistas	Consultores e intelectuales	Líderes de la sociedad civil	Total
Perdería el respaldo de todo el sector empresario	27	51	28	33	14	35
Perdería el respaldo sólo de las empresas afectadas	20	10	11	11	14	13
No perdería respaldo empresario	17	7	11	28	29	15
Ganaría el respaldo de una parte del sector empresarios, excluyendo a las empresas afectadas	27	17	50	17	29	26
No sabe/no responde	10	15	-	11	14	10
Casos (no ponderados)	42	46	10	18	14	130

Nota: las cifras representan porcentajes verticales salvo cuando se indica que son casos.

Los datos de la tabla 32 profundizan en la temática del apoyo empresario. Se buscaba medir la percepción sobre la importancia de la alianza gobierno-empresas para la fortaleza del nuevo modelo económico argentino. Las opiniones están bastante divididas. Un 42% de los entrevistados creen que el modelo depende bastante o mucho de la mencionada alianza (casi todos los sindicalistas opinan así), mientras que un 39% cree que depende poco o nada (siendo los políticos los que en mayor medida se ubican en esta posición). Los propios empresarios están bastante divididos sobre la cuestión.

Tabla 32. Opinión sobre en qué medida el mantenimiento del nuevo modelo económico depende de la fortaleza de la alianza entre el gobierno y los empresarios nacionales e internacionales según sector al que pertenecen los encuestados

	Políticos y gobernantes	Empresarios	Sindicalistas	Consultores e intelectuales	Líderes de la sociedad civil	Total
Mucho	10	16	29	12	23	16
Bastante	12	35	53	24	8	26
Algo	20	9	-	24	31	15
Poco	10	19	18	12	15	15
Nada	44	19	-	18	15	24
No sabe/no responde	5	2	-	12	8	5
Casos (no ponderados)	42	46	10	18	14	130

Nota: las cifras representan porcentajes verticales salvo cuando se indica que son casos.

2.5. La regulación de servicios públicos privatizados

Buena parte de las privatizaciones, y prácticamente todas las de gran envergadura, involucraron empresas monopólicas y/o de servicios públicos (nacionales como ENTEL o regionales como SEGBA). Ambas condiciones, la de monopolios y las de servicios públicos, alejan a estas empresas de la lógica de libre competencia del mercado y exigen la intervención del estado en su regulación. Cada sector privatizado (y también cada actividad estatal no empresaria transferida al sector privado, como el sistema de jubilación y la concesión de rutas), dio origen a la creación de un marco regulatorio y un ente descentralizado encargado de aplicarlo. La experiencia regulatoria del estado argentino hasta las privatizaciones se limitaba al sistema bancario (supervisado por el Banco Central de la República Argentina) y a otros sectores como los seguros, la carne, los granos, etc. La regulación de servicios públicos de gestión privada sin competencia o con competencia limitada se constituyó en un desafío para el estado recién en la década de los 90¹¹.

Mirando más allá de las privatizaciones en sí mismas y de la forma en que fueron hechas, el cuestionario apuntó también a evaluar la calidad de las instituciones y prácticas regulatorias durante los 90. La tabla 33 presenta los resultados de la evaluación global de la legislación vigente. Las opiniones del total de los encuestados se distribuyen simétricamente en torno de la categoría "regular": la mitad de los entrevistados se ubica allí, con un 20% en cada una de las categorías adyacentes superior e inferior. La simetría desaparece en las opiniones extremas, donde al 1% de los que consideran las normas regulatorias muy buenas se le opone un 7% que piensa que son muy malas.

¹¹ Debe quedar claro que varias importantes empresas estatales privatizadas no constituían servicios públicos, como YPF y SOMISA, y algunas de ellas operaban en mercados relativamente competitivos (como el de la venta de combustibles o el de los vuelos internacionales). Algunas privatizaciones provocaron un aumento inmediato de la competencia, como fue el caso en el sector eléctrico, donde las centrales fueron vendidas a diferentes dueños y obligadas a competir. En otros casos el marco regulatorio preveía un aumento futuro en los niveles de competencia, como fue el caso del sector de las telecomunicaciones. Las características de algunos de estos sectores obliga a una intensa actividad regulatoria por parte del estado aún en un ambiente competitivo.

Tabla 33. Opinión sobre las normas regulatorias existentes para los servicios públicos privatizados según sector al que pertenecen los encuestados

	Políticos y gobernantes	Empresarios	Sindicalistas	Consultores e intelectuales	Líderes de la sociedad civil	Total
Muy buenas	-	2	-	-	-	1
Buenas	12	44	-	18	7	21
Regulares	48	46	41	65	50	49
Malas	26	5	41	12	29	20
Muy malas	10	2	18	6	-	7
No sabe/No contesta	5	-	-	-	14	3
Casos (no ponderados)	42	46	10	18	14	130

Nota: las cifras representan porcentajes verticales salvo cuando se indica que son casos.

El análisis sectorial muestra una vez más a empresarios y sindicalistas en posiciones opuestas: entre los primeros casi una mitad con una visión favorable de la legislación regulatoria, mientras que prácticamente el 70% de los segundos expresan opiniones negativas. Entre los políticos y los líderes de la sociedad civil predominan también las evaluaciones desfavorables, mientras que entre los consultores e intelectuales hay paridad.

Las tablas 34 y 34bis muestran las evaluaciones sobre el desempeño de cada uno de los principales entes reguladores del estado argentino. La primera de ellas presenta los porcentajes incluyendo las respuestas “no sabe” y “no responde”, mientras que la segunda los elimina con el objeto de obtener porcentajes de aprobación y desaprobación sólo para aquellos que emitieron una opinión. Puede observarse en la primera tabla que, salvo para el caso del Banco Central, hay porcentajes importantes de “no sabe”, indicando que muchos entrevistados no están informados sobre el quehacer de cada uno de los entes. La primera columna, resaltada en negrita, es la suma de las opiniones “muy buena” y “buena”, y es el criterio ordenador. En la tabla 34 el BCRA y la superintendencia de AFJP se destacan como los únicos entes con más del 50% de opiniones favorables. Algo por debajo aparece el Enargás, y luego el resto de los organismos reguladores de servicios públicos de red (la CNC, el ETOSS y el ENRE). El OCT, la CNRT y el ORNSA, todos vinculados al transporte, obtienen pocas aprobaciones y aproximadamente un tercio de opiniones negativas.

Tabla 34. Calificación de la actuación de los entes reguladores

	uy uena Buena	uy uena	uena	egu- ar	ala	uy ala	S	R
Banco Central	54	15	39	22	14	8	1	1
Superintendencia de AFJP	49	4	45	15	7	5	22	3
ENARGAS (Gas)	44	6	38	27	5	1	21	1
CNC (Comunicaciones)	33	1	32	34	16	4	12	1
ETOSS (Agua en el AMBA)	28	2	26	25	10	4	31	2
ENRE (Electricidad)	27	6	21	41	19	3	8	2
OCCV (Concesiones viales)	16	2	14	26	30	5	20	4
CNRT (Transporte)	10	0	10	35	26	4	23	2
ORSNA (Aeropuertos)	10	0	10	26	26	5	29	4

Nota: las cifras representan porcentajes horizontales.

Base: 130 casos.

Quando se excluye a los que no saben responder la pregunta o no quieren hacerlo (tabla 34bis), las Superintendencia de AFJP se ubica en el primer lugar y el Enargás en el segundo, junto con el BCRA. En el resto de cuadro se mantienen, con leves modificaciones, las posiciones de la tabla anterior.

Tabla 34bis. Calificación de la actuación de los entes reguladores (sin considerar “no sabe” y “no responde”)

	uy uena Buena	uy uena	uena	egu- ar	ala	uy ala
Superintendencia de AFJP	64	5	59	19	10	7
ENARGAS (Gas)	57	8	49	35	7	1
Banco Central	55	15	40	22	15	8
ETOSS (Agua en el AMBA)	41	3	38	38	15	6
CNC (Comunicaciones)	38	1	37	39	19	5
ENRE (Electricidad)	30	7	23	46	21	4
OCCV (Concesiones viales)	20	2	18	34	39	7
CNRT (Transporte)	14	-	14	47	34	5
ORSNA (Aeropuertos)	14	-	14	39	39	7

Nota: las cifras representan porcentajes horizontales.

Como se ve, los entrevistados diferencian entre algunos entes de buen desempeño (como el de las AFJP), otros cuya actuación podría ser calificada de intermedia (la CNC, por ejemplo), y otros de muy pobre tarea (como el ORSNA). La siguiente tabla presenta el análisis de las opiniones sobre estos tres entes y sobre el BCRA según sector.

La superintendencia de AFJP y el Banco Central obtienen muy buenas evaluaciones por parte de los empresarios y los consultores/intelectuales, y opiniones preponderantemente negativas entre los sindicalistas. Los políticos y los líderes sociales se encuentran en una posición intermedia entre los grupos mencionados, aunque con claro predominio de las opiniones positivas. El comportamiento sectorial descrito no se repite para la CNC y el ORSNA: sindicalistas y empresarios demuestran opiniones muy parecidas, mientras que los consultores e intelectuales se constituyen en el grupo atípico, por tener una posición bastante más crítica de estos entes.

Tabla 35. Calificación de la actuación agencias reguladoras seleccionadas (sin considerar “no sabe” y “no responde”) según sector al que pertenecen los encuestados

	Políticos y gobernantes	Empresarios	Sindicalistas	Consultores e intelectuales	Líderes de la sociedad civil	Total
Superintendencia de AFJP						
Muy bien+Bien	54	91	18	71	50	63
Regular	31	6	29	21	17	20
Mal+Muy mal	15	3	53	7	33	18
Casos (no ponderados)	27	37	10	16	7	97
Banco Central						
Muy bien+Bien	48	73	19	71	46	55
Regular	23	22	19	18	31	22
Mal+Muy mal	30	5	63	12	23	23
Casos (no ponderados)	41	45	10	18	13	127
CNC (Comunicaciones)						
Muy bien+Bien	33	44	41	19	56	38
Regular	33	47	29	56	22	39
Mal+Muy mal	33	9	29	25	22	23
Casos (no ponderados)	37	37	10	17	10	111
ORSNA (Aeropuertos)						
Muy bien+Bien	15	14	14	-	38	15
Regular	41	39	36	36	38	39
Mal+Muy mal	44	46	50	64	25	47
Casos (no ponderados)	28	29	8	12	9	86

Nota: las cifras representan porcentajes verticales salvo cuando se indica que son casos.

A los encuestados se les leyó una lista de factores que a menudo se consideran responsables de las fallas de los entes reguladores y se les pidió que indiquen en cada caso cuánto dificultaban su desempeño. La injerencia política y la corrupción fueron, en ese orden, los factores considerados más importantes. El diseño institucional de los entes, su dependencia respecto de las empresas que regulan y el grado de concentración empresarial en el sector regulado son los factores que siguen. La falta de recursos humanos y, en particular, de recursos materiales, son consideradas como dificultades menos importantes. En otras palabras, la tabla 36 dice que cuando las agencias reguladoras fallan lo hacen principalmente por intereses políticos o por corrupción más que por faltarles personal capacitado o presupuesto.

Tabla 36. Grado en que una serie de factores dificultan el desempeño de los entes reguladores

	Dificultan mucho	Dificultan bastante	Dificultan algo	Dificultan poco	No dificultan	NS	NR
Injerencia política	41	27	12	5	4	10	2
Corrupción	41	20	12	10	4	10	3
Diseño institucional	24	35	16	6	5	12	2
Grado de concentración de la propiedad en el sector respectivo	28	20	18	10	13	8	3
Dependencia económica de las empresas	28	18	10	13	14	14	3
Disponibilidad de recursos humanos	16	35	20	6	11	9	2
Disponibilidad de recursos materiales	5	23	22	18	20	10	2

Nota: las cifras representan porcentajes horizontales.

Los líderes sindicales son los que atribuyen mayor importancia a todos los factores propuestos como posibles obstáculos para el buen desempeño de los entes reguladores. Los políticos y los empresarios tienden a mencionar menos a los factores asociados con su sector, la injerencia política y el grado de concentración y la dependencia económica de las empresas, respectivamente. A diferencia de los demás sectores, los técnicos e intelectuales evalúan diferentemente a la injerencia política y a la corrupción, atribuyendo a la primera mayor importancia que a la segunda. También destacan otros dos factores: la dependencia económica de las empresas y la disponibilidad de recursos humanos.

Tabla 37. Porcentaje que contestó que los factores listados dificultan mucho o bastante el desempeño de los entes reguladores según sector al que pertenecen los encuestados

	Políticos y gobernantes	Empresarios	Sindicalistas	Consultores e intelectuales	Líderes de la sociedad civil	Total
Injerencia política	57	68	78	71	69	67.0
Corrupción	60	58	78	44	75	61
Diseño institucional	71	45	78	50	36	57
Grado de concentración de la propiedad en el sector respectivo	57	32	76	33	46	47
Dependencia económica de las empresas	56	15	78	56	39	44
Disponibilidad de recursos humanos	44	41	71	59	57	50
Disponibilidad de recursos materiales	32	15	61	23	14	27
Casos (no ponderados)	42	46	10	18	14	130

Nota: las cifras representan los porcentajes sumados de las respuestas "dificulta mucho" y "dificulta bastante", salvo cuando se indica que son casos.

Tabla 38. Factores que determinan la autonomía de los entes reguladores (pregunta abierta; primera mención y tres primeras menciones sumadas)

	1er. Lugar	Tres primeras menciones
Marco regulatorio / diseño institucional	30	51
Independencia de autoridades respecto a empresas y a Estado	24	40
Capacidad / idoneidad de funcionarios	14	38
Independencia económica	9	15
Participación de usuarios y gobiernos locales	5	13
Capacidad de hacer cumplir las sanciones que imponen	2	5
Directivos sujetos a control	2	7
Otros	8	22
No sabe/No contesta	6	6
Total	100.0	*

Base: 130 casos.

* Suma más de 100% por tratarse de respuestas múltiples.

Los líderes entrevistados consideran que la autonomía de los entes está en buena parte determinada por el marco regulatorio e institucional y por la independencia de las autoridades de los entes respecto de las empresas reguladas y del estado. Un tercer factor bastante mencionado es el de la idoneidad de los funcionarios reguladores. No se detectan tendencias claramente diferenciadas al analizar esta pregunta según sector dirigenal.

Los resultados de la tabla 39 muestran que la mayoría de los encuestados atribuyen a los consumidores poca capacidad de modificar las condiciones de la prestación de servicios públicos y a las organizaciones y asociaciones de consumidores poca eficacia. Sólo aproximadamente un 20% cree que los usuarios y sus representantes tienen mucha o bastante influencia y eficacia,

respectivamente. Las asociaciones de consumidores son consideradas menos eficaces por los políticos y los empresarios y más eficaces por los intelectuales y los líderes sociales (algunos de los cuales son directivos de organizaciones de defensa de los derechos del consumidor).

Tabla 39. Capacidad de influencia de los consumidores y usuarios y eficacia de las organizaciones que los representan según sector al que pertenecen los encuestados

	Políticos y gobernantes	Empresarios	Sindicalistas	Consultores e intelectuales	Líderes de la sociedad civil	Total
Capacidad de influencia de los consumidores y usuarios						
Mucha	-	12	-	6	8	6
Bastante	5	22	18	17	15	15
Alguna	29	10	12	28	15	20
Poca	49	49	59	44	54	50
Ninguna	17	7	12	6	-	10
No sabe/No responde	-	-	-	-	8	1
Eficacia de las organizaciones que los representan						
Muy eficaces	-	-	-	6	7	1
Bastante eficaces	10	12	29	24	29	17
Algo eficaces	37	32	18	18	21	29
Poco eficaces	42	46	53	47	36	44
Nada eficaces	12	10	-	-	-	7
No sabe/No responde	-	-	-	6	7	1
Casos (no ponderados)	42	46	10	18	14	130

Nota: las cifras representan porcentajes verticales salvo cuando se indica que son casos.

La visión de los líderes tampoco es muy positiva sobre la protección legal de los derechos del consumidor (tabla 40). La mayoría cree que están regularmente protegidos, con el resto distribuyéndose en partes iguales entre los que creen que están bien o muy bien protegidos y mal o muy mal protegidos. Los consultores e intelectuales son los que tienen una visión más positiva de las leyes referentes a los derechos del consumidor, estando los sindicalistas en el extremo opuesto.

Tabla 40. Grado en que los derechos de los consumidores, clientes y usuarios están debidamente protegidos por la ley según sector al que pertenecen los encuestados

	Políticos y gobernantes	Empresarios	Sindicalistas	Consultores e intelectuales	Líderes de la sociedad civil	Total
Muy bien protegidos	5	7	-	11	-	5
Bien protegidos	20	27	19	22	31	23
Regularmente protegidos	37	44	31	61	54	43
Mal protegidos	34	17	31	6	15	23
Muy mal protegidos	-	5	19	-	-	4
No sabe/No responde	5	-	-	-	-	2
Casos (no ponderados)	42	46	10	18	14	130

Nota: las cifras representan porcentajes verticales salvo cuando se indica que son casos.

2.6. Las reformas tributarias

La parte final del cuestionario indagó sobre cuestiones de política tributaria y sobre las reformas impositivas de la década. La primera pregunta consistió en una evaluación de esas reformas en términos de varios de sus objetivos. Los resultados aparecen en la tabla 41: en tres de los cuatro casos la opinión más frecuente es "regular", aunque hay más evaluaciones positivas que negativas en lo que hace al incremento de la capacidad fiscal del estado y al mejoramiento de la administración tributaria. En cambio predominan las respuestas negativas en lo que hace a la simplificación de sistema impositivo y a la facilidad y costo de pagar impuestos.

Tabla 41. Evaluación de las reformas tributarias hechas desde 1989 hasta 1999

Cual es su evaluación de las reformas en términos de...	Muy buena	buena	regular	Mala	Muy mala	NS	NR
Incremento de la capacidad fiscal del estado	6	32	44	16	2	1	0
Mejoramiento de la administración tributaria	4	28	46	16	4	1	1
Simplificación del sistema impositivo	2	14	41	32	10	1	0
Hacer más fácil y más barato el pago de impuestos	1	16	32	35	14	2	1

Base: 130 casos.

Nota: las cifras representan porcentajes horizontales.

El análisis sectorial de la tabla 42 muestra que los líderes políticos son los que en mayor medida creen que se ha incrementado la capacidad fiscal del estado y mejorado la administración tributaria. Los sindicalistas se destacan por creer en menor medida que pagar impuestos se haya hecho más fácil y barato.

Tabla 42. Evaluación de las reformas tributarias en términos de cuatro objetivos (sin considerar “no sabe” y “no responde”) según sector al que pertenecen los encuestados -

	Políticos y gobernantes	Empresarios	Sindicalistas	Consultores e intelectuales	Líderes de la sociedad civil	Total
Incremento de la capacidad fiscal del estado						
Muy buena+Buena	59	24	18	35	46	38
Regular	28	62	29	47	46	44
Mala+Muy mala	13	14	53	18	8	19
Casos (no ponderados)	41	46	10	18	14	129
Mejoramiento de la administración tributaria						
Muy buena+Buena	50	15	41	35	31	34
Regular	35	60	41	47	46	47
Mala+Muy mala	15	25	18	18	23	20
Casos (no ponderados)	40	45	10	18	13	126
Hacer más fácil y barato el pago de impuestos						
Muy buena+Buena	20	13	12	29	18	18
Regular	35	40	18	29	18	32
Mala+Muy mala	45	48	71	41	64	50
Casos (no ponderados)	41	45	10	17	13	126
Simplificación del sistema impositivo						
Muy buena+Buena	18	13	18	18	15	16
Regular	50	45	41	29	31	43
Mala+Muy mala	33	43	41	53	54	42
Casos (no ponderados)	41	45	10	18	14	128

Nota: las cifras representan porcentajes verticales salvo cuando se indica que son casos.

La mayoría de los entrevistados, según muestra la tabla 43, piensa que la capacidad administrativa y la atención a los contribuyentes de la AFIP mejoró desde 1989. Sólo el 10% piensa lo contrario. Los avances en términos de lucha contra la corrupción son evaluados menos positivamente, con casi un 40% que cree que en este aspecto no se ha mejorado ni empeorado, y un 23% adicional que cree que se ha empeorado. En todos los casos las evaluaciones más negativas corresponden a los sindicalistas que, además, se encuentran bastante polarizados: tienden a concentrarse en las dos categorías extremas de la variable. El sector con actitud más favorable hacia la evolución de la AFIP es el de los líderes sociales. Las diferencias sectoriales indicadas, sin embargo, no son de gran magnitud. A diferencia de lo que ocurre en muchos otros ítems de la encuesta, los temas de la tabla 43 no generan posiciones encontradas entre los diferentes sectores dirigenciales.

Tabla 43. Evaluación sobre si la capacidad administrativa, la atención a los contribuyentes y la lucha contra la corrupción en la AFIP han mejorado o han empeorado desde 1989 (sin considerar “no sabe” y “no responde”) según sector al que pertenecen los encuestados

	Políticos y gobernantes	Empresarios	Sindicalistas	Consultores e intelectuales	Líderes de la sociedad civil	Total
La capacidad administrativa de la AFIP ha...						
Mejorado mucho o algo	76	76	71	78	77	75
Ni mejorado ni empeorado	10	20	-	11	15	12
Empeorado algo o mucho	10	5	29	11	-	10
No sabe/No responde	5	-	-	-	8	2
La atención a los contribuyentes ha...						
Mejorado mucho o algo	61	64	50	53	69	60
Ni mejorado ni empeorado	15	29	11	35	15	21
Empeorado algo o mucho	7	7	39	-	-	10
No sabe/No responde	17	-	-	12	15	8
La lucha contra la corrupción ha...						
Mejorado mucho o algo	44	28	29	33	39	35
Ni mejorado ni empeorado	37	40	29	39	54	39
Empeorado algo o mucho	12	30	41	28	-	23
No sabe/No responde	7	3	-	-	8	4
Casos (no ponderados)	42	46	10	18	14	130

Nota: las cifras representan porcentajes verticales salvo cuando se indica que son casos.

Dada la comparativamente muy alta tasa del impuesto al valor agregado en la Argentina y la centralidad del mismo en el sistema tributario, se juzgó importante conocer la posición de los líderes en el debate entre mantener o reducir su alícuota (aunque teóricamente sería posible aumentarla, esta opción no se planteó porque ningún actor relevante la propone). Las cifras de la siguiente tabla muestran un gran consenso sobre la necesidad de reducirla con el objeto de disminuir los impuestos sobre el consumo. No hay sindicalistas ni líderes sociales que opinen que hay que mantener la tasa como está, mientras que aproximadamente un 20% de los políticos, los empresarios y los intelectuales se manifiestan en ese sentido.

Tabla 44. Preferencias sobre el IVA según sector al que pertenecen los encuestados

	Políticos y gobernantes	Empresarios	Sindicalistas	Consultores e intelectuales	Líderes de la sociedad civil	Total
La tasa del IVA del 21% debe ser...						
Reducida para disminuir la presión tributaria sobre el consumo	76	76	100	78	92	80
Mantenida porque es el impuesto de mayor y más fácil recaudación	20	21	-	17	-	15
No sabe/No responde	5	2	-	6	8	5
Casos (no ponderados)	42	46	10	18	14	130

Nota: las cifras representan porcentajes verticales salvo cuando se indica que son casos.

En la ausencia de un (muy poco probable) “efecto Laffer”, una reducción de la tasa del IVA implicaría una disminución de la recaudación impositiva del gobierno nacional. Consecuentemente, a aquellos entrevistados que optaron por esta opción se les pidió que indiquen si recurrirían o no a una serie de mecanismos de financiación pública planteados en el cuestionario. Los resultados se exhiben en la tabla 45.

La disminución del gasto público es claramente la opción más favorecida, mientras que, en el otro extremo, el aumento de los impuestos al trabajo no recibe ni un solo apoyo. Las opiniones se dividen aproximadamente en partes iguales en la opción de aumentar el impuesto a las ganancias de las personas. El aumento de las ganancias a las empresas es algo menos apoyado, mientras que el aumento de los impuestos a la propiedad o a la renta presunta son mayoritariamente rechazados.

Tabla 45. Opiniones sobre diversas formas de financiar una disminución en la tasa del IVA según sector al que pertenecen los encuestados

	Políticos y gobernantes	Empresarios	Sindicalistas	Consultores e intelectuales	Líderes de la sociedad civil	Total
Disminución del gasto público						
Si	-	-	-	-	-	-
No	71	97	71	75	77	80
No sabe/No responde	26	3	29	17	15	17
	3	-	-	8	8	3
Aumento del impuesto a las ganancias de personas físicas						
Si	52	23	82	50	46	47
No	42	77	18	50	46	50
No sabe/No responde	6	-	-	-	8	3
Aumento del impuesto a las ganancias de las empresas						
Si	52	19	82	17	54	43
No	36	81	18	83	31	51
No sabe/No responde	13	-	-	-	15	6
Aumento del impuesto a las propiedades						
Si	23	16	59	18	25	27
No	61	84	41	73	67	67
No sabe/No responde	16	-	-	9	8	7
Aumento del impuesto a la renta presunta de empresas						
Si	19	7	18	8	31	15
No	69	94	82	92	62	80
No sabe/No responde	13	-	-	-	8	5
Aumento del impuesto al trabajo						
Si	-	-	-	-	-	-
No	87	97	100	100	92	94
No sabe/No responde	13	3	-	-	8	6
Casos (no ponderados)	32	36	10	12	13	103

Nota: las cifras representan porcentajes verticales salvo cuando se indica que son casos.

Base: personas que opinan que la tasa del IVA debe ser reducida (104 casos ponderados -103 no ponderados- de 130, o el 80%).

La disminución del gasto público es popular en todos los sectores, pero particularmente en el de los empresarios (los que más resisten esta opción son los sindicalistas y los políticos). Los líderes empresarios son también los que más se oponen al aumento de cualquier impuesto. En lo que hace a ganancias personales se destacan como los únicos que se oponen mayoritariamente. En el rubro ganancias de las empresas están acompañados por los consultores e intelectuales. La oposición se hace más generalizada en los impuestos a la propiedad (sólo apoyados por los sindicalistas) y a la renta presunta de las empresas (rechazado por la mayoría de todos los sectores). Como queda dicho, ningún segmento de la dirigencia expresa apoyo al aumento de los impuestos al trabajo. Los sindicalistas tienen una actitud favorable a aumentar el gravamen sobre ganancias y propiedades, pero no sobre renta presunta o trabajo.

De la misma forma en que la necesidad de hacer planteos realistas en el cuestionario implicó pedirle a los líderes que indiquen como financiarían una reducción del IVA, la opción por la reducción del gasto público –apoyada por la mayoría de los encuestados– implica también plantear el interrogante sobre la manera de lograr tal reducción. En la tabla 46 se presentan la media de la prioridad asignada por los encuestados a una serie de posibles formas de reducir el gasto público. Los gastos reservados, con un ranking promedio de 1,25 (lo cual equivale a decir que una importante mayoría de los entrevistados colocaron a este rubro como el prioritario a la hora de recortar el gasto público), son claramente la partida del presupuesto con menos apoyo de los líderes. En un casi empatado segundo puesto siguen los viáticos y los ATN. La inversión en infraestructura aparece en un lejano cuarto lugar. Cierran la lista las jubilaciones, la educación y la salud, los tres con rankings promedio superiores a 5. Los líderes, entonces, parecen tener las siguientes prioridades: primero deberían reducirse los gastos políticos y burocráticos (gastos reservados, viáticos) y luego la inversión física, de forma tal de no afectar el gasto social en rubros como salud y educación..

Tabla 46. Rubros del presupuesto nacional que deberían reducirse en la eventualidad de una disminución del gasto público según sector al que pertenecen los encuestados

	Políticos y gobernantes	Empresarios	Sindicalistas	Consultores e intelectuales	Líderes de la sociedad civil	Total
Gastos reservados	1,18 (36)	1,28 (45)	1,40 (10)	1,28 (16)	1,13 (13)	1,25 (120)
Viáticos	2,34 (32)	2,17 (45)	2,10 (10)	2,80 (16)	2,19 (12)	2,29 (115)
Aportes del Tesoro Nacional (ATN)	2,08 (34)	2,74 (43)	2,89 (9)	1,87 (16)	2,87 (12)	2,46 (114)
Infraestructura	3,93 (25)	3,83 (41)	3,43 (7)	3,94 (15)	3,86 (12)	3,83 (100)
Jubilaciones	4,90 (23)	5,04 (40)	5,83 (6)	4,47 (15)	5,28 (12)	5,03 (96)
Programas educativos	5,15 (22)	5,88 (40)	5,40 (5)	5,49 (15)	5,97 (12)	5,61 (94)
Salud	4,98 (21)	6,00 (40)	6,40 (5)	5,69 (15)	5,78 (12)	5,73 (93)

Nota: las cifras son rankings promedio (ranking mayor=1, ranking menor=7). Cada encuestado debió ordenar los siete rubros presentados del que recortaría en primer lugar al que recortaría en último lugar, aceptándose empates. Las cifras entre paréntesis son los números de casos no ponderados. Una menor cantidad de casos indica una mayor cantidad de entrevistados que no contestaron la pregunta.

El análisis por sector muestra algunas diferencias de interés. Los consultores e intelectuales, por ejemplo, se centran más en los ATN (y menos en los viáticos) que los demás dirigentes. Interesantemente esta partida –fondos que el Ministerio del interior distribuye a las provincias con mucha discrecionalidad– es menos prioritaria a la hora de reducir el gasto para los empresarios y los sindicalistas que para los políticos. Los sindicalistas son los menos (y los consultores e intelectuales los más) predispuestos a afectar las jubilaciones.

El siguiente tema que se encaró en el cuestionario dentro de la temática fiscal fue el de la evasión impositiva. Dando por supuesto un amplio consenso en el sentido de que la Argentina sufre un muy alto nivel de evasión de impuestos, se preguntó a los encuestados sobre las causas de este fenómeno y sobre las posibles soluciones. La tabla 47 muestra el nivel de acuerdo del total de los entrevistados con siete explicaciones plausibles del nivel de evasión en nuestro país. Los dos primeros ítems, con los que coinciden la gran mayoría de los líderes encuestados, tienen que ver con la impunidad: los grandes evasores no sufren ninguna consecuencia y la justicia es tan débil que casi nunca castiga a los evasores. Con un nivel algo inferior de acuerdo aparecen la percepción de corrupción, la cultura de falta de respeto de la ley y las características de la Ley Penal Tributaria. La percepción de cierta incapacidad de la AFIP para detectar evasores genera algún nivel de acuerdo en la mayoría de los entrevistados, aunque menor que para los ítems mencionados. La dificultad de acceder a créditos es la explicación menos aceptada.

Tabla 47. Grado de acuerdo con siete posibles explicaciones del alto nivel de evasión impositiva en la Argentina

	Muy de acuerdo	Bastante de acuerdo	Algo de acuerdo	Poco de acuerdo	Nada de acuerdo	NS	NR
La falta de ejemplaridad: los que más evaden nunca tienen problemas	57	28	9	3	2	1	0
La percepción que tienen los contribuyentes de que la justicia es débil. Raramente castiga a los evasores.	48	33	13	4	3	0	0
La percepción que tienen los contribuyentes de un clima de corrupción generalizada.	39	28	17	11	3	1	1
Nuestra cultura, que legitima la falta generalizada de respeto a la ley	30	33	21	7	9	0	0
La Ley Penal Tributaria, que no es efectiva	30	30	22	10	6	4	0
La percepción que tienen los contribuyentes de que la AFIP no tiene capacidad para detectar a los evasores	19	32	26	15	6	0	1
El alto costo y la escasez de crédito en el mercado financiero	12	15	28	22	22	0	1

Nota: las cifras representan porcentajes horizontales.

Base: 130 casos.

El análisis sectorial de estos datos es presentado en la tabla 48. Un dato destacable es la aparente actitud “defensiva” de los líderes políticos y gubernamentales, que tienden a dar menor importancia a la debilidad de la justicia (recordemos que este sector incluye a 6 funcionarios del poder judicial) y a la percepción de corrupción. También es interesante el hecho de que los supuestos afectados por la falta de crédito, los empresarios (y aún más los intelectuales, muchos de los cuales son especialistas en cuestiones tributarias), no consideran que ese sea una causa importante de la evasión, mientras que políticos, sindicalistas y líderes sociales lo creen en mayor medida. Finalmente es de destacar la visión de los consultores e intelectuales, quienes con bastante claridad privilegian las explicaciones institucionales, como la debilidad de la justicia o de la AFIP, al tiempo que asignan menor poder explicativo a los factores culturales, tales como nuestra supuesta tendencia a no cumplir las leyes.

Tabla 48. Porcentaje de entrevistados que están “muy de acuerdo” o “bastante de acuerdo” con siete posibles explicaciones del alto nivel de evasión impositiva en la Argentina según sector al que pertenecen los encuestados

	Políticos y gobernantes	Empresarios	Sindicalistas	Consultores e intelectuales	Líderes de la sociedad civil	Total
La falta de ejemplaridad: los que más evaden nunca tienen problemas	83	88	89	65	92	84
La percepción que tienen los contribuyentes de que la justicia es débil. Raramente castiga a los evasores.	69	88	81	89	77	81
La percepción que tienen los contribuyentes de un clima de corrupción generalizada.	51	73	76	50	86	67
Nuestra cultura, que legitima la falta generalizada de respeto a la ley	65	60	71	47	77	63
La Ley Penal Tributaria, que no es efectiva	46	67	78	65	39	60
La percepción que tienen los contribuyentes de que la AFIP no tiene capacidad para detectar a los evasores	41	56	47	72	50	51
El alto costo y la escasez de crédito en el mercado financiero	36	20	53	-	39	27
Casos (no ponderados)	42	46	10	18	14	130

Nota: las cifras representan los porcentajes sumados de las respuestas “muy de acuerdo” y “bastante de acuerdo”, salvo cuando se indica que son casos.

¿Qué soluciones tiene el problema de la evasión? Según la tabla 49 las dos más apoyadas por el conjunto de los entrevistados, quienes las consideran mayoritariamente muy o bastante efectivas, son incrementar la capacidad de sanción del Poder Judicial y simplificar el sistema tributario. Apenas por debajo de éstas aparecen la mejora en la capacidad de gestión del la AFIP, el castigo ejemplar a evasores famosos y dos factores asociados al desempeño del estado en general: disminuir la corrupción y mejorar la eficiencia del gasto público. La disminución de la carga tributaria y el impulso de un cambio cultural desde el estado también son consideradas medidas efectivas por la mayoría de los líderes, aunque en menor grado que las mencionadas anteriormente. La única medida de la lista que es considerada poco o nada efectiva por una proporción importante de los entrevistados es la baja en las tasas de interés.

Tabla 49. Grado de efectividad atribuido a una serie de medidas que se han propuesto para reducir la evasión impositiva en la Argentina

	Muy efectiva	Bastante efectiva	Algo efectiva	Poco efectiva	Nada efectiva	NS	NR
Hacer más eficiente el Poder Judicial para incrementar la capacidad de sanción	60	32	5	2	1	0	1
Simplificar el sistema tributario	57	34	6	2	1	0	0
Mejorar la capacidad de gestión de la AFIP	48	37	12	1	0	1	1
Disminuir sensiblemente la corrupción	61	23	10	2	3	1	0
Castigos ejemplares a evasores conocidos por la gente	57	26	9	6	1	1	1
Mejorar la eficiencia en el gasto público	59	22	12	6	2	0	0
Bajar la carga tributaria	40	36	16	7	1	0	0
Impulsar un cambio en la cultura tributaria desde el Estado	45	27	16	6	4	1	0
Bajar las tasas de interés que pagan los contribuyentes	22	16	22	24	14	2	0

Nota: las cifras representan porcentajes horizontales.

Base: 130 casos.

En la tabla 50, en el que se desagregan los resultados por sector, se vuelve a notar el relativo escepticismo de los intelectuales respecto de las medidas de tipo cultural: éstos creen en mucho menor medida que los demás que el cambio en la cultura tributaria o la sensación de que el estado es menos corrupto y gasta mejor llevarán a que se evada menos. Los consultores confían mucho más en las sanciones judiciales, en los castigos ejemplares y en la gestión de la agencia recaudadora, es decir, en incentivos materiales concretos. El resto de los sectores dirigenciales tiende a no diferenciarse demasiado de las cifras correspondientes al total de la muestra.

Tabla 50. Porcentaje de entrevistados que cree que cada una de las siguientes medidas que se han propuesto para reducir la evasión impositiva en la Argentina serían “muy efectivas” o “bastante efectivas” según sector al que pertenecen los encuestados

	Políticos y gobernantes	Empresarios	Sindicalistas	Consultores e intelectuales	Líderes de la sociedad civil	Total
Hacer más eficiente el Poder Judicial para incrementar la capacidad de sanción	88	90	100	89	92	92
Simplificar el sistema tributario	93	93	89	82	92	91
Mejorar la capacidad de gestión de la AFIP	88	90	76	89	69	85
Disminuir sensiblemente la corrupción	85	88	89	56	92	84
Castigos ejemplares a evasores conocidos por la gente	88	79	78	82	79	83
Mejorar la eficiencia en el gasto público	78	83	100	50	92	81
Bajar la carga tributaria	81	71	100	71	54	76
Impulsar un cambio en la cultura tributaria desde el Estado	81	60	100	44	85	72
Bajar las tasas de interés que pagan los contribuyentes	43	27	78	11	39	38
Casos (no ponderados)	42	46	10	18	14	130

Nota: las cifras representan los porcentajes sumados de las respuestas “muy efectiva” y “bastante efectiva”, salvo cuando se indica que son casos.

Como una estrategia adicional de indagación sobre las actitudes de los encuestados frente a la evasión, se les pidió que expresen su acuerdo o desacuerdo con tres frases sobre la misma. Los resultados aparecen en la tabla 51. En los tres casos la mayoría de los líderes expresaron su acuerdo, aunque con diferentes intensidades. La necesidad de reducir el campo de acción de la economía informal para reducir la evasión fue el ítem que generó más consenso, seguido de la tesis según la cual la evasión se explica en parte por la desconfianza de los argentinos hacia un estado que fue por mucho tiempo ineficiente y autoritario y que no logró estabilidad política y económica. Mas controvertida es la idea de que la evasión es una suerte de subsidio a quienes han tenido dificultades para adaptarse a las reformas económicas de los 90.

Tabla 51. Acuerdo con tres frases sobre la evasión tributaria en la argentina según sector al que pertenecen los encuestados

	Políticos y gobernantes	Empresarios	Sindicalistas	Consultores e intelectuales	Líderes de la sociedad civil	Total
Para disminuir la evasión tributaria hay que "blanquear" la economía informal¹						
Muy de acuerdo+De acuerdo	90	81	100	71	62	84
En desacuerdo+Muy en desacuerdo	5	20	-	24	23	13
No sabe/No responde	5	-	-	6	15	4
La tolerancia social a la evasión se debe a la desconfianza hacia el Estado²						
Muy de acuerdo+De acuerdo	78	73	82	77	69	76
En desacuerdo+Muy en desacuerdo	17	27	18	18	8	20
No sabe/No responde	5	-	-	6	23	5
La evasión funciona como un subsidio para empresas en dificultades³						
Muy de acuerdo+De acuerdo	63	54	47	47	43	54
En desacuerdo+Muy en desacuerdo	34	46	41	47	50	42
No sabe/No responde	2	-	12	6	7	4
Casos (no ponderados)	42	46	10	18	14	130

Nota: las cifras representan porcentajes verticales salvo cuando se indica que son casos.

1. "Para disminuir significativamente la evasión tributaria es necesario 'blanquear' la economía informal".
2. "La tolerancia de la sociedad hacia la evasión tributaria está relacionada con la desconfianza que los argentinos tienen del Estado, generada durante décadas de ineficiencia, autoritarismo e inestabilidad económica y política".
3. "La evasión es una especie de subsidio para muchos empresarios e individuos que tienen dificultades para acomodarse a los cambios económicos de la última década".

Los líderes más convencidos de la tesis de la economía informal son los sindicales, mientras los de la sociedad civil expresan menos acuerdo, en parte por algunos que no están de acuerdo y en parte por otros que no saben como contestar la pregunta. Lo mismo ocurre con la cuestión de la desconfianza hacia el estado. Es interesante el hecho de que más de la mitad de los empresarios prestan su acuerdo a la frase sobre la evasión como un subsidio a las dificultades de adaptación a los cambios económicos. Los políticos son quienes están más de acuerdo con esa idea.

Existen varias explicaciones de la evasión que apuntan a problemas de representación política, partiendo de la máxima estadounidense de "*no taxation without representation*". La idea básica es que si los mecanismos de representación de los ciudadanos en el estado son débiles o inefectivos, entonces habrá una menor predisposición a pagar impuestos. Los porcentajes de la tabla 52 indican que la mayoría de los entrevistados cree que esta predisposición aumentaría si la opinión pública conociera con más precisión el destino de los fondos públicos y si se redujera la proporción de los mismos que se malgasta en clientelismo. Una mayoría algo más reducida también cree que una mayor participación de la ciudadanía en las decisiones sobre asignación de recursos públicos también contribuiría a una mejor conducta tributaria. La eliminación de las listas sábanas del sistema electoral tendría, de acuerdo a los líderes, un impacto bastante limitado sobre los hábitos de pago de impuestos.

Tabla 52. Grado en que mejoraría la conducta tributaria de los argentinos si ocurrieran una serie de cambios en el sistema de representación

	Mejoraría mucho	Mejoraría bastante	Mejoraría algo	Mejoraría poco	No mejoraría nada	NS	NR
La gente supiera mejor en qué se gasta el dinero del presupuesto	30	34	23	4	7	1	2
Se redujera considerablemente el clientelismo político	30	31	17	6	13	2	1
Se diera más participación a los ciudadanos en la distribución de los recursos fiscales	21	30	25	7	14	2	2
Cambiara el sistema electoral, eliminando las listas sábana	15	15	18	13	35	4	1

Nota: las cifras representan porcentajes horizontales.

Base: 130 casos.

A nivel sectorial (tabla 53) los comportamientos más consistentes son los de los sindicalistas y los políticos. Los primeros confían en las cuatro iniciativas más que el promedio, mientras con los segundos ocurre lo contrario: los líderes gubernamentales y políticos parecen tener una visión algo "corporativa", particularmente en lo que hace a su actitud muy negativa hacia la eliminación de las listas sábana. Los consultores e intelectuales también tienen porcentajes menores al promedio, quizás indicando lo que se vio en datos anteriores: este grupo tiende a creer en incentivos materiales concretos más que en incentivos simbólicos o bienes públicos (en el sentido de que benefician a todos sin necesidad de que cada persona contribuya individualmente a su logro), como pueden ser las mejoras en la representación.

Tabla 53. Porcentaje de entrevistados que creen que la conducta impositiva de los argentinos “mejoraría mucho” o “mejoraría bastante” si ocurrieran una serie de cambios en el sistema de representación según sector al que pertenecen los encuestados

	Políticos y gobernantes	Empresarios	Sindicalistas	Consultores e intelectuales	Líderes de la sociedad civil	Total
La gente supiera mejor en qué se gasta el dinero del presupuesto	55	68	89	35	75	64
Se redujera considerablemente el clientelismo político	50	65	89	50	58	61
Se diera más participación a los ciudadanos en la distribución de los recursos fiscales	43	48	71	47	69	51
Cambiara el sistema electoral, eliminando las listas sábana	12	42	51	18	31	30
Casos (no ponderados)	42	46	10	18	14	130

Nota: las cifras representan los porcentajes sumados de las respuestas “mejoraría mucho” y “mejoraría bastante”, salvo cuando se indica que son casos.

Las cifras de la tabla 54 son muy impactantes. Allí se muestran los resultados de la pregunta sobre el grado de compromiso de los partidos políticos con la lucha contra la evasión. La moda, o respuesta más frecuente, es “poco comprometidos”. El 60% de los líderes entrevistados cree que los partidos están entre poco y nada comprometidos con aquella lucha, y un escasísimo 1% (un solo entrevistado) aseguró que están muy comprometidos. La opinión de los líderes políticos y gubernamentales es apenas mejor: un 51% cree que los partidos tienen poco o nada de compromiso con el tema. Los líderes sociales, los intelectuales y los empresarios son, en ese orden, los que menos creen en el compromiso de los partidos (conclusión que surge de sumar las respuestas “poco comprometidos” y “nada comprometidos”).

Tabla 54. Grado de compromiso de los partidos políticos con la lucha contra la evasión según sector al que pertenecen los encuestados

	Políticos y gobernantes	Empresarios	Sindicalistas	Consultores e intelectuales	Líderes de la sociedad civil	Total
Muy comprometidos	-	-	-	-	8	1
Bastante comprometidos	5	14	29	6	-	12
Algo comprometidos	42	21	12	29	15	27
Poco comprometidos	39	43	41	41	69	43
Nada comprometidos	12	21	18	24	8	17
No sabe/No responde	2	-	-	-	-	1
Casos (no ponderados)	42	46	10	18	14	130

Nota: las cifras representan porcentajes verticales salvo cuando se indica que son casos.

En otras palabras, existe un importante consenso que atraviesa a todos los sectores de la dirigencia, incluyendo los propios involucrados, en el sentido de que los partidos políticos no manifiestan una particular voluntad de combatir la evasión fiscal. Dado el muy conocido consenso sobre la gran magnitud de la evasión en la Argentina y las innumerables urgencias fiscales que el estado tiene desde hace años, la pregunta es: ¿Por qué los partidos no le dedican atención y esfuerzo a este tema? El cuestionario no formuló esta pregunta, pero sin duda los lectores podrán inmediatamente formarse varias ideas al respecto.

2.7. Dos variables de segmentación relevantes: el Índice de desempeño estatal y el Índice de estatismo-privatismo

En las tablas 55 y 56 se presentaron datos correspondientes a dos índices construidos en base a indicadores sobre evaluación del desempeño del estado argentino y sobre preferencias entre el estado o el mercado para desempeñar una serie de funciones públicas. Ambos índices¹², el de Desempeño Estatal (IDE) y el de Estatismo-Privatismo (IEP) resultan útiles no sólo como variables dependientes que resumen y simplifican la información de muchas otras, sino también como variables independientes. Así, por ejemplo, se podrá verificar si los entrevistados más críticos del desempeño del estado argentino tienen opiniones diferentes que los demás, o si los estatistas se diferencian en otras cuestiones de los privatistas. Aunque los índices son de naturaleza intervalar, se han generado dos variables ordinales de 5 categorías. En las dos tablas siguientes se las cruza por las variables de clasificación más relevantes con el objeto de determinar el perfil de los entrevistados pertenecientes a cada categoría.

La primera de estas tablas, la 55, corresponde al IDE. Los segmentos definidos por esta variable no se diferencian significativamente por sexo, edad, nacionalidad, educación, lugar de residencia, etc. Tampoco hay asociación clara o fuerte entre el IDE y el Índice de estatismo-privatismo. Una variable de clasificación que sí distingue a los 5 grupos definidos por el IDE es la identificación partidaria: el segmento que mejor evalúa el desempeño del estado argentino está compuesto por 2/3 de justicialistas y 1/3 de personas que no se identifican con ningún partido o no responden. Los entrevistados con opiniones más críticas tienden a pertenecer a partidos de la oposición, especialmente a los de la Alianza. Es muy probable que estos resultados estén influenciados por una tendencia del oficialismo a defender o idealizar al estado que está conduciendo y una tendencia contraria por parte de la oposición. De hecho hay una correlación clara entre el IDE y ser líder oficialista¹³: casi la mitad de los que creen que el desempeño del estado argentino es muy bueno son oficialistas, contra un 15% en el total de la muestra.

¹² La definición de estos índices puede consultarse en el anexo III.

¹³ La mayoría de los líderes entrevistados pueden ser clasificados sin dificultades como oficialistas o no. Conceptualmente el oficialismo es la condición de pertenecer a o simpatizar fuertemente con la administración gobernante. Operacionalmente se codificó como oficialistas a los integrantes del PEN designados o propuestos por el presidente (incluyendo entes reguladores, el BCRA, la AFIP y las FFAA), a los legisladores, gobernadores, intendentes y ministros provinciales pertenecientes al partido justicialista y a otros entrevistados que ocuparon alguno de estos cargos recientemente.

Tabla 55. Variables de clasificación de los encuestados según Índice de desempeño estatal

	Índice de desempeño estatal					Total
	Muy malo	Malo	Regular	Bueno	Muy bueno	
Hombres	87	89	98	86	100	93
Mujeres	13	11	2	14	0	7
Edad promedio (en años)	51,6	52,1	53,0	55,5	52,4	53,1
Desviación estándar	6,2	10,3	11,7	9,0	5,0	9,7
Nivel educativo						
Hasta 1 ^o rio. completo	13	-	-	-	-	2
Hasta 2 ^o rio. completo	-	22	6	4	13	9
Hasta univers. incompleto ¹	13	-	13	14	-	9
Universitario completo	33	44	49	36	31	41
Postgrado/especialización	7	11	13	21	25	15
Maestría	13	11	6	18	13	12
Doctorado	20	11	11	7	19	12
No responde	-	-	2	-	-	1
Area de estudios univers.						
Derecho	36	33	24	29	20	29
Economía	7	11	29	29	7	20
Ingeniería	7	11	9	7	1	9
Administración	7	7	7	-	13	5
Contabilidad	-	-	9	4	-	4
Otras	-	7	2	7	13	6
No tiene estudios universit.	21	22	13	7	13	15
No responde	21	7	4	18	33	13
Argentinos	100	96	91	93	93	93
Extranjeros	-	4	7	7	7	6
No responde	-	-	2	-	-	1
Nacidos en...						
Capital Federal	40	37	49	41	40	43
Provincia de Buenos Aires ²	33	22	20	21	27	23
Otras provincias	-	4	9	21	7	9
Exterior	7	-	2	-	7	2
No responde						
Casos (no ponderados)	14	26	46	29	15	130

1. Incluye estudios terciarios incompletos y completos.

2. Incluye los partidos del conurbano bonaerense.

Tabla 55 (continuación). Variables de clasificación de los encuestados según IDE

	Muy malo	Malo	Regular	Bueno	Muy bueno	Total
Residentes en...						
Capital Federal	60	59	63	64	53	60
Provincia de Buenos Aires ²	33	26	28	29	33	29
Otras provincias	7	15	7	7	13	10
No responde	-	-	2	-	-	1
Trabajan en...						
Capital Federal	80	85	80	76	80	80
Provincia de Buenos Aires ²	7	15	13	21	13	14
Otras provincias	7	-	4	3	7	5
Exterior	7	-	-	-	-	1
No responde	-	-	2	-	-	1
Años trabajando en...						
Buenos Aires ³	20,4	24,0	21,8	23,5	23,2	22,6
Interior del país	5,8	5,5	5,3	5,9	11,4	6,3
Residencia en el exterior						
Si	53	58	46	61	33	51
No	40	42	50	36	67	46
No responde	-	-	4	4	-	3
Años trabajados en...						
Sector público	10,1	10,9	8,6	9,1	12,9	9,9
Sector privado	22,4	22,0	22,2	16,4	14,3	20,0
Organismos internacionales	3,1	2,3	2,3	2,2	2,3	2,4
Tercer sector	8,6	7,2	6,5	7,3	7,6	7,2
Antig. en cargo actual						
Media (en años)	4,4	8,7	6,3	5,0	4,5	6,0
Desviación estándar	4,1	9,5	6,9	3,2	3,0	6,4
Identificación partidaria						
Partido Justicialista	20	7	22	14	67	21
Acción por la República	13	7	13	14	-	11
Unión Cívica Radical	13	21	9	-	-	9
FREPASO	13	11	2	4	-	5
Alianza	7	4	9	4	-	5
Otros	7	14	7	4	-	8
Ninguno	27	25	33	46	27	33
No responde	-	11	4	14	7	8
Líder oficialista	7	4	9	21	50	15
Líder no oficialista	93	96	91	79	50	85
Índice de estatat.-privat.						
Media	2,9	3,1	3,2	3,2	3,1	3,1
Desviación estándar	0,7	0,7	0,6	0,5	0,5	0,6
Casos (no ponderados)	14	26	46	29	15	130

Nota: las cifras representan porcentajes verticales salvo cuando se indica que son promedios (medias aritméticas), desviaciones estándar o casos.

3. Definido ampliamente como la aglomeración urbana desde Campana hasta La Plata.

El análisis de los segmentos definidos de acuerdo al Índice de estatismo-privatismo (tabla 56) muestra que existe alguna relación con la educación: hay una gran concentración de líderes con niveles educativos relativamente bajos en el grupo más estatista, mientras que lo contrario ocurre en los segmentos intermedio y privatista (con un leve descenso en el nivel educativo para el segmento más privatista). Esta relación es en parte consecuencia del estatismo de los líderes sindicales, quienes tienden a tener un nivel educativo inferior al del resto de los líderes¹⁴. Se plantea, entonces, un problema de interpretación causal: ¿el estatismo es producto de la baja educación, de la actividad sindical o de algún otro factor asociado con estas dos? El mismo argumento funciona en sentido inverso: los empresarios tienden a ser privatistas y a tener altos niveles educativos.

Varios indicadores de asociación con Buenos Aires o el interior guardan relación con el IEP, en el sentido de que los líderes más "porteños" son más privatistas que sus contrapartes del interior. Así, por ejemplo, a medida que se transita de la categoría "muy estatistas" a la categoría "muy privatistas", aumenta la proporción de entrevistados que nacieron, residen o trabajan en la Capital Federal, y disminuyen los representantes del interior. También ocurre que a medida que aumenta el privatismo disminuye la cantidad de años trabajados en el interior. En un sentido similar, hay una asociación clara entre el IEP y el haber residido en el exterior: la mayoría de los muy estatistas nunca vivió en el extranjero, mientras que la mayoría de los muy privatistas sí lo hizo.

Existe en este caso también alguna relación con la identificación partidaria. Entre los más estatistas predominan líderes cercanos al PJ, el Frepaso y la UCR, mientras que entre los más privatistas predominan los de AR, con escasa presencia del PJ y nula presencia de las fuerzas de la Alianza. El oficialismo parece tener una relación curvilínea con el IEP: los picos de participación de líderes oficialistas aparecen en las categorías intermedias, correspondiendo los valores más bajos a las dos categorías extremas.

¹⁴ Sólo el 18% de los sindicalistas entrevistados tiene un título universitario contra el 89% del total del resto de los líderes. El IEP de los sindicalistas es de 2,44, siendo el del resto de la muestra 3,25.

Tabla 56. Variables de clasificación de los encuestados según Índice de estatismo-privatismo

	Índice de estatismo-privatismo					Total
	Muy estatistas	Estatistas	Intermedios	Privatistas	Muy Privatistas	
Hombres	89	87	93	97	93	93
Mujeres	11	13	7	3	7	7
Edad promedio (en años)	55,6	52,1	53,8	51,5	53,2	53,1
Desviación estándar	9,6	11,7	8,7	10,3	8,2	9,7
Nivel educativo						
Hasta 1rio. completo	11	-	-	-	-	2
Hasta 2rio. completo	44	4	-	9	7	9
Hasta univers. incompleto ¹	11	17	12	3	-	9
Universitario completo	28	50	41	34	47	41
Postgrado/especialización	6	8	18	13	33	15
Maestría	-	4	14	25	7	12
Doctorado	-	17	14	16	7	12
No responde	-	-	2	-	-	1
Area de estudios univers.						
Derecho	18	48	26	22	27	29
Economía	-	9	23	34	20	20
Ingeniería	6	-	12	9	20	9
Administración	-	4	2	3	20	5
Contabilidad	-	-	5	9	-	4
Otras	8	13	5	-	-	6
No tiene estudios universit.	58	13	2	2	7	15
No responde	8	9	23	12	7	13
Argentinos	100	100	83	100	87	93
Extranjeros	-	-	14	-	13	6
No responde	-	-	2	-	-	1
Nacidos en...						
Capital Federal	19	44	44	41	73	43
Provincia de Buenos Aires ²	50	17	21	22	-	23
Otras provincias	25	39	14	28	13	23
Exterior	6	-	16	6	13	9
No responde	-	-	5	3	-	2
Casos (no ponderados)	12	23	44	34	16	129

1. Incluye estudios terciarios incompletos y completos.

2. Incluye los partidos del conurbano bonaerense.

Tabla 56 (continuación). Variables de clasificación de los encuestados según IEP

	Muy estat.	Estatistas	Intermedios	Privatistas	Muy Privatistas	Total
Residentes en...						
Capital Federal	18	57	64	69	86	60
Provincia de Buenos Aires ²	59	35	29	19	14	29
Otras provincias	24	9	5	13	-	10
No responde	-	-	2	-	-	1
Trabajan en...						
Capital Federal	61	70	81	94	93	80
Provincia de Buenos Aires ²	22	26	14	-	7	14
Otras provincias	17	4	-	7	-	5
Exterior	-	-	2	-	-	1
No responde	-	-	2	-	-	1
Años trabajando en...						
Buenos Aires ³	23,7	25,0	21,4	22,6	21,6	22,6
Interior del país	12,8	6,6	4,3	8,0	0,8	6,3
Residencia en el exterior						
Si	17	30	61	58	79	51
No	78	61	37	42	21	46
No responde	6	9	2	-	-	3
Años trabajados en...						
Sector público	12,6	18,6	8,7	7,7	2,1	9,9
Sector privado	22,4	13,3	17,2	23,7	26,6	20,0
Organismos internacionales	4,3	3,2	2,3	1,3	1,5	2,4
Tercer sector	14,9	11,5	5,9	3,3	4,2	7,2
Antig. en cargo actual						
Media (en años)	8,0	7,1	4,8	6,7	4,2	6,0
Desviación estándar	4,9	5,6	6,6	7,9	3,9	6,4
Identificación partidaria						
Partido Justicialista	28	22	20	24	7	21
Acción por la República	-	-	7	15	33	11
Unión Cívica Radical	11	17	12	3	-	9
FREPASO	28	9	2	0	-	5
Alianza	-	9	10	3	-	5
Otros	17	13	2	6	7	8
Ninguno	17	13	39	49	33	33
No responde	-	17	7	-	20	8
Líder oficialista	0	17	17	22	7	15
Líder no oficialista	100	83	83	78	93	85
Índice de desempeño est.						
Media	2,5	2,8	2,8	2,9	2,6	2,8
Desviación estándar	0,7	0,5	0,6	0,5	0,5	0,6
Casos (no ponderados)	12	23	44	34	16	129

Nota: las cifras representan porcentajes verticales salvo cuando se indica que son promedios (medias aritméticas), desviaciones estándar o casos.

3. Definido ampliamente como la aglomeración urbana desde Campana hasta La Plata.

Anexo I: Listado de entrevistados

Sectores	Subsectores (casos realizados)	Nombre del entrevistado (Institución)
Líderes políticos y de gobierno	Partidarios (4)	Guillermo Francos (AR) Gustavo Gutiérrez (PD-Mendoza) Jesús Rodríguez (UCR) 1 líder anónimo
	Poder Ejecutivo Nacional (15)	Victor Alderete (Presidente del PAMI) Eduardo Amadeo (n.a.) Martín Balza (n.a.) Rodolfo Barra (Presidente del ORSNA) Héctor Domenicone (Superintendente de AFJPs) Raúl Granillo Ocampo (Ministro de Justicia) Julio Nogues (Subsecretario de Programación Macroeconómica) Martín Lagos (Vice-presidente del Banco Central) Martín Lascano (Director del ETOSS) Jorge Rodríguez (Jefe de Gabinete) Carlos Silvani (Director de la AFIP) José Alberto Uriburu (Ministro de Trabajo y Seguridad Social) José María Vernet (Subs. de Asistencia Financiera a Provincias) Carlos María Zabala (Jefe del Estado Mayor Conjunto) 1 funcionario anónimo
	Provinciales y municipales (5)	Elio Aprile (Intendente UCR-Mar del Plata) Hermes Binner (n.a.) Horacio Larcamon (Jefe de asesores-Minist. de economía- Prov. Bs. As.) Federico Ramón Puerta (Gobernador PJ-Misiones) Felipe Sapag (Gobernador MPN-Neuquén)
	Legisladores nacionales (12)	Darío Alessandro (Diputado Frepaso-Capital) Juan Pablo Cafiero (Diputado Frepaso-Buenos Aires) Juan Manuel Casella (Diputado UCR-Buenos Aires) Elisa Carrió (Diputada UCR-Chaco) José Genoud (Senador UCR-Mendoza) María Cristina Guzmán (Diputada MPJ-Jujuy) Oscar Lamberto (Diputado PJ-Santa Fe) Ana María Mosso (Diputada PJ-Mendoza) Pedro Salvatori (Diputado MPN-Neuquén) Federico Storani (Diputado UCR-Buenos Aires) Roberto Ulloa (n.a.) Jorge Villaverde (Senador PJ-Buenos Aires)

	Poder Judicial de la Nación (6)	Adolfo Bagnasco (Juez Federal) Horacio Cattani (Juez de la Cámara Federal de la Capital Federal) Gabriel Cavallo (Juez Federal) Alberto Obdulio Pisano (Juez de la Corte Suprema-Prov. Buenos Aires) Carlos Soto Dávila (Juez Federal de Corrientes) 1 funcionario judicial anónimo
Líderes Empresarios	Empresarios (33)	Jorge Aguado (SOCMA) Serafín Alvarez Tato (n.a.) Osvaldo Bonadeo (La Plata Cereal) Fernando Borio (Telefónica) Haroldo Dahn (Pasa/Refinor/Refinería San Lorenzo) Norberto Dubar (Volkswagen) Alberto García Carmona (Chevrolet/General Motors) Agustín García Mansilla (n.a.) Emilo Genovesio (Sancor) Luis Irlicht (Grafa) Ramiro Lafarga (Telecom Personal) Marcelo Markous (Sistema de Protección Médica) Juan Carlos Migliorini (Pirelli Cables) Sebastián Mocerrea (IBM) Roberto Monti (n.a.) Eduardo Ojea Quintana (Transportadora de Gas del Sur) Miguel Ortiz (Central Costanera) Gustavo Pitaluga (Acindar) Francisco Ponasso (Edenor) Miguel Angel Rebolledo (SADE) Daniel Redondo (Esso) Martín Ruete (CEI) Julio Cesar Saguier (La Nación) Sergio Rodríguez Zubieta (Camuzzi Gas Pampeana) Javier Tizado (Techint/Siderca/Siderar/Comesi) Oscar Vignart (Polisur) Luis Villalba (Novartis) Patricio Zavalía Lagos (n.a.) 5 empresarios anónimos
	Banqueros (9)	Leonardo Anidjar (Bansud) Enrique Cristofani (Banco Río) Antonio Donadeu Farnes (Banco Tornquist) Joaquín Eslava (J.P. Morgan) Raúl Guelman (Banco Credicoop) Alfredo Gutierrez Guirault (n.a.) Jorge Heinze (n.a.) Carlos Jordán (Bank of New York) Guillermo Madariaga (Morgan Stanley)

	Empresarios de AFJPs y Seguros (4)	Guillermo Alchourrón (Orígenes AFJP) Aquilino Madariaga (Federación Patronal) Jorge Mandelbaun (La Caja) Alberto Spagnolo (Nación AFJP)
Líderes sindicales	CGT (0)	
	Otras centrales sindicales (2)	Juan Manuel Palacios (MTA) Marta Maffei (CTERA)
	Grandes sindicatos (8)	Francisco Gutierrez (n.a.) Jorge Lobais (AOT) José Pedraza (Unión Ferroviaria) Andrés Rodríguez (UPCN) José Rodríguez (SMATA) Víctor Santa María (Trabajadores de edificios de renta y horizontal) Juan Carlos Schmid (Personal de dragado y balizamiento) Juan José Zanola (Bancarios)
Líderes intelectuales	Consultores (11)	Miguel Angel Broda (n.a.) Roberto Dromi (Estudio Dromi) Jorge Forteza (consultor empresarial, n.a.) Juan Jackson (Price Waterhouse) Julio Kelly (abogado, n.a.) Diana Mondino (Standard & Poor's) Ernesto O'Farrell (Estudio Marval, O'Farrell y Mairal) Adolfo Sturzenegger (consultor económico, n.a.) Enrique Szewach (Evaluadora Latinoamericana) Mario Vicens (MV Macroeconomía) Consultor político anónimo
	Intelectuales influyentes (4)	Jorge Castro (Secretaría de Planeamiento Estratégico-PEN) Pablo Gerchunoff (F. Argentina para el Desarrollo con Equidad) José Luis Machinea (F. Argentina para el Desarrollo con Equidad) Juan Llach (IRREAL-Fundación Mediterránea)
Líderes religiosos	Obispos (3)	José María Arancedo (Obispo católico de Mar del Plata) Jorge Cassaretto (Obispo católico de San Isidro) Gerardo Farrell (Obispo católico coadjutor de Quilmes)
Líderes sociales	Asociaciones de consumidores (2)	Sandra González (Adecua) Lita de Lazzari (Liga de Amas de Casa)
	Organiz. de derechos humanos (2)	José Miguez Bonino (APDH) Martín Abregú (CELS)
	Organiz. de derechos	Silvia Uranga (Conciencia)

	ciudadanos (1)	
	Colegios profesionales (2)	Jorge Baqué (n.a.) Jorge Viacava (Colegio de escribanos de la Capital Federal)
	Cámaras empresarias (4)	Jorge Di Fiori (Cámara Argentina de Comercio) Horacio López Santiso (Cámara de AFJPs) Manuel Sacerdote (Consejo Empresarial Argentino) Presidente de cámara empresaria anónimo
Líderes de organismos internacion.	Organismos internacionales (3)	Myrna Alexander (Banco Mundial) José María Puppo (BID) Funcionario de organismo internacional de crédito anónimo
Total	(130)	

1. Los entrevistados que no autorizaron la publicación de sus nombres aparecen como "funcionario anónimo" o "empresario anónimo". Las pertenencias institucionales son las correspondientes a la fecha de la entrevista. En muchos casos esas pertenencias se modificaron con posterioridad a la encuesta, especialmente entre los líderes políticos y gubernamentales a partir del cambio de autoridades nacionales en diciembre de 1999.

n.a.: No autoriza la publicación de la pertenencia institucional. Dado que generalmente dicha pertenencia es pública y notoria, la no autorización expresa un énfasis por parte del entrevistado en que las opiniones vertidas son estrictamente personales y que no necesariamente representan a su organización.

Anexo II: Cuestionario

Número de encuesta: _____

Nombre del encuestador: _____

Nombre del entrevistado: _____

Lugar y dirección de la entrevista: _____

Dirección postal del entrevistado: _____

Fecha de la entrevista: ___ / ___ /99

Teléfono(s) del entrevistado: _____, _____, _____

Fax del entrevistado: _____

1) ¿Aproximadamente cuántos años ha trabajado usted, en forma continua o no, desde que trabajo por primera vez, en cada uno de los siguientes sectores (**en caso de tener o haber tenido más de una ocupación, preguntar por la ocupación principal**)?

a) En el sector público (PEN, PLN, PJN, organismos descentralizados, empresas públicas, medios públicos, administ.

provinciales/municipales, FFAA y de seguridad, escuelas, universidades u hospitales públicos, etc.): _____ Años

b) En el sector privado (Empresas, Bancos, consultoras, por cuenta propia, medios privados, escuelas, universidades u

hospitales privados, etc.): _____ Años

c) En organismos internacionales (ONU y dependencias, OEA, FMI, BM, BID, etc.): _____ Años

d) En el tercer sector (Sindicatos, cámaras empresarias, iglesias, ONGs, Colegios profesionales, etc.): _____ Años

2) a) ¿Cuál es su antigüedad en su actual función (**llenar los otros casilleros**)?

b) ¿Tiene Ud. alguna otra ocupación aparte de la de.....

Cargo/función	Institución (<u>detallar si no es conocida</u>)	Antigüedad
a. _____	_____	_____
_____	_____	_____
b. _____	_____	_____
_____	_____	_____

3) Seguramente sus funciones le requieren dedicar parte de su tiempo a interactuar con organismos de la administración pública nacional, provincial o municipal (trámites, gestiones, pedidos etc., ante los ministerios y secretarías, los entes reguladores, los bancos públicos, la AFIP, etc.) ¿En promedio, que cantidad de horas de trabajo dedica por semana a relacionarse con la administración pública? _____ horas

4) (Si dedica más de 0 horas) Cuáles son los organismos de la administración pública con los que más relación tiene? (comenzando con el que le insume más tiempo; detallando naturaleza del organismo si no es claro)

- a). _____
 b). _____
 c). _____

5) ¿Cómo diría usted que los funcionarios de planta, es decir no políticos, de la administración pública nacional cumplen en general con sus funciones: muy bien, bien, regular, mal o muy mal?:

- 1) Muy bien 2) Bien 3) Regular 4) Mal 5) Muy mal 9) NS 0) NR

6) Y comparando a los funcionarios de la administración pública nacional con los de las provincias usted diría que en general los de las provincias cumplen sus funciones mucho mejor, mejor, igual, peor o mucho peor que los de la nación?

- 1) Mucho mejor 2) Mejor 3) Igual 4) Peor 5) Mucho peor 9) NS 0) NR

7) Le vamos a mencionar una serie de medidas que se han propuesto para mejorar la calidad de la administración pública. Por favor díganos si le parecen muy, bastante, algo, poco o nada efectivas.

	Muy efectiva	Bastante efectiva	Algo efectiva	Poco efectiva	Nada efectiva	NS	NR
a) Aumentar el salario de los funcionarios	1	2	3	4	5	9	0
b) Otorgar incentivos ligados al cumplimiento de objetivos	1	2	3	4	5	9	0
c) Aumentar la inversión en capacitación del personal	1	2	3	4	5	9	0
d) Subcontratar o concesionar actividades al sector privado	1	2	3	4	5	9	0
e) Reducir la planta de personal	1	2	3	4	5	9	0
f) Descentralizar funciones desde la administración nacional hacia la provincial y municipal	1	2	3	4	5	9	0

Varias de las preguntas que siguen utilizan la palabra "Estado". No se refiere a un gobierno en particular, sino al conjunto de instituciones que dentro de un territorio determinado ejerce legalmente el poder y posee el monopolio de la coerción.

8) Hay situaciones en que el Estado fracasa en el cumplimiento de sus funciones u objetivos. Cuando esto ocurre, ¿cree usted que en general la responsabilidad es mayormente de los políticos que ocupan las más altas funciones en el Estado o mayormente de los funcionarios de planta de la administración pública?

1) De los políticos 2) De los funcionarios administrativos 3) De ambos 4) De ninguno 9) NS
0) NR

9) A partir de otros países que conoce, qué modelo de Estado diría que es mejor?

10) ¿Para cada una de las siguientes áreas, podría usted decirme si deberían ser totalmente responsabilidad del Estado, principalmente del Estado, compartidas entre Estado y sector privado, principalmente del sector privado o totalmente del sector privado?

	totalmen- e estatal	rincipal- ente estatal	Estatal y privada	Principalmen- te privada	Totalmen- te privada	NS	NR
a) Educación	1	2	3	4	5	9	0
b) Salud	1	2	3	4	5	9	0
c) Jubilaciones	1	2	3	4	5	9	0
d) Crédito	1	2	3	4	5	9	0
e) Servicios públicos (electricidad, telefonía)	1	2	3	4	5	9	0
f) Construcción de vivienda	1	2	3	4	5	9	0
g) Infraestructura (rutas, puertos)	1	2	3	4	5	9	0
h) Seguridad	1	2	3	4	5	9	0
i) Investigación Científica y Tecnológica	1	2	3	4	5	9	0

11) Le vamos a mencionar una serie de roles que pueden ser desempeñados por el Estado. Por favor indique para cada uno de ellos si usted cree que el Estado argentino debería desempeñarlo o no. (**no leer la opción depende**)

	Si	Depende	No	NS	NR
a) Regulador de la actividad económica	1	2	3	9	0
b) Prestador de servicios públicos	1	2	3	9	0
c) Empresario	1	2	3	9	0
d) Mediador	1	2	3	9	0
e) Proveedor de subsidios a sectores económicos estratégicos	1	2	3	9	0
f) Promotor de la equidad social	1	2	3	9	0

12) (**Sólo para los que contestaron depende**) ¿De qué depende? (**hasta 3 opciones**)

- a) _____
 b) _____
 c) _____

13) ¿Cómo calificaría usted la capacidad de satisfacer la demanda de bienes públicos, como seguridad, salud y educación, que tiene hoy el Estado en la Argentina?

1) Muy alta 2) Alta 3) Media 4) Baja 5) Muy Baja 9) NS 0) NR

14) Le vamos a nombrar una serie de áreas de acción del Estado. Por favor díganos si le parece que el Estado argentino ha tenido, en la última década, un desempeño muy bueno, bueno, regular, malo o muy malo en cada una de ellas.

	Muy bueno	Bueno	Regular	Malo	Muy malo	NS	NR
a) Educación	1	2	3	4	5	9	0
b) Salud	1	2	3	4	5	9	0
c) Jubilaciones	1	2	3	4	5	9	0
d) Crédito	1	2	3	4	5	9	0
e) Vivienda	1	2	3	4	5	9	0
f) Infraestructura (rutas, puertos)	1	2	3	4	5	9	0
g) Seguridad	1	2	3	4	5	9	0
h) Justicia	1	2	3	4	5	9	0
i) Política social	1	2	3	4	5	9	0
j) Política fiscal	1	2	3	4	5	9	0

15) ¿Cuáles son para usted los principales obstáculos que enfrentan las políticas públicas para ser implementadas con éxito?

- a) _____
 b) _____

16) (Si contestó "regular", "malo" o "muy malo" en alguna de las áreas de la pregunta 14) Le vamos a mencionar una serie de factores que pueden explicar el bajo desempeño del Estado argentino en algunas de las mencionadas áreas. Nos gustaría que los ordene del más al menos importante: (se aceptan empates)

Ranking **(Entregar tarjeta N° 1)**

- a. Falta de planeamiento _____
 b. Falta de presupuesto _____
 c. Baja calidad de los recursos humanos _____
 d. Baja calidad del gerenciamiento público _____
 e. Falta de liderazgo político _____
 f. Corrupción de los funcionarios _____

17) Las políticas que el Estado implementa son influidas por muchos factores. Nos gustaría que nos diga en qué medida le parece a Ud. que las políticas públicas son producto de los siguientes factores:

	En gran medida	n alguna medida	n ninguna medida	NS	NR
a) Planificación técnica	1	2	3	9	0
b) Visión estratégica de los políticos	1	2	3	9	0
c) Acción de los lobbies	1	2	3	9	0
d) Improvisación	1	2	3	9	0
e) Ideología de los políticos	1	2	3	9	0
f) Demandas de la ciudadanía	1	2	3	9	0

18) ¿Cuánto influyen los siguientes actores en el diseño e implementación de políticas públicas?

	Mucho	Bastante	Algo	Poco	Nada	NS	NR
a) Los empresarios	1	2	3	4	5	9	0
b) Los sindicatos	1	2	3	4	5	9	0
c) La Iglesia Católica	1	2	3	4	5	9	0
d) Los medios de comunicación	1	2	3	4	5	9	0
e) Las Fuerzas Armadas	1	2	3	4	5	9	0
f) Los organismos internacionales de crédito	1	2	3	4	5	9	0
g) Las ONGs	1	2	3	4	5	9	0
h) La ciudadanía	1	2	3	4	5	9	0
i) El Congreso de la Nación	1	2	3	4	5	9	0
j) La administración pública	1	2	3	4	5	9	0

19) ¿Cuáles son los logros principales y cuáles las tareas pendientes del programa de reformas económicas implementado por el gobierno nacional desde 1989 a la fecha?

19.1) Logros principales (del más al menos importante):

- a) _____
 b). _____
 c). _____

19.2) Tareas pendientes (comenzando con la más prioritaria):

- a). _____
 b). _____
 c). _____

20) Ud. diría que tomadas en conjunto las reformas económicas han tenido para el gobierno más costos que beneficios políticos, más beneficios que costos políticos, o costos y beneficios han sido aproximadamente equivalentes?

- 1) Las reformas generaron más costos que beneficios políticos
 2) Las reformas generaron más beneficios que costos políticos
 3) Las reformas generaron beneficios y costos políticos de similar magnitud 9) NS 0) NR

21) En el momento en que fueron lanzadas las privatizaciones, usted consideraba que las mismas serían muy buenas, buenas, regulares, malas o muy malas para el desarrollo del país (a)? ¿Y ahora que la mayoría de las ex-empresas del estado están en manos privadas, cree que las privatizaciones han sido muy buenas, buenas, regulares, malas o muy malas para el desarrollo del país (b)?

	uy uenas	uenas	egulares	Malas	uy alas	S	R
a) Expectativas antes de las privatizaciones	1	2	3	4	5	9	0
b) Opinión a posteriori	1	2	3	4	5	9	0

22) ¿Tomando en cuenta el conjunto de las privatizaciones, qué opinión le merece la forma en que fueron realizadas?

- 1) Muy buena 2) Buena 3) Regular 4) Mala 5) Muy Mala 9) NS 0) NR

23) ¿Qué privatizaciones fueron para usted las mejor hechas, y cuáles las peores (puede mencionar empresas y/o sectores)?

23.1) Mejores:

- a) _____
 b) _____
 c) _____

23.2) Peores:

- a) _____
 b) _____
 c) _____

24) Le vamos a mencionar algunos de los beneficios que se han argumentado para fundamentar la necesidad de privatizar. ¿En qué medida estos beneficios se han materializado en el caso argentino: mucho, bastante, algo, poco o nada?

	Mucho	Bastante	Algo	Poco	Nada	NS	NR
a) Mejora en la calidad de los servicios prestados	1	2	3	4	5	9	0
b) Mejora de la eficiencia en la asignación de recursos	1	2	3	4	5	9	0
c) Mayores inversiones en las áreas privatizadas	1	2	3	4	5	9	0
d) Disminución del gasto público	1	2	3	4	5	9	0
e) Reducción en el tamaño del Estado	1	2	3	4	5	9	0
f) Creación de mercados más competitivos y transparentes	1	2	3	4	5	9	0

25) ¿Usted diría que luego de las privatizaciones la prestación de los siguientes servicios públicos ha...?

	Mejorado mucho	Mejorado algo	Ni mejorado ni empeorado	Empeorado algo	Empeorado mucho	NS	NR
a) Telecomunicaciones	1	2	3	4	5	9	0
b) Electricidad	1	2	3	4	5	9	0
c) Gas de red	1	2	3	4	5	9	0
d) Agua potable	1	2	3	4	5	9	0
e) Transporte público	1	2	3	4	5	9	0
f) Rutas con peaje	1	2	3	4	5	9	0
g) Jubilaciones y pensiones	1	2	3	4	5	9	0

26) Hay quienes quieren anular las privatizaciones, quienes proponen revisarlas y renegociar algunos contratos que consideran perjudiciales para el país y quienes piensan que es mejor respetar los contratos, como estan.

¿Con cual posición está usted más de acuerdo?

- 1) Anular las privatizaciones
- 2) Renegociar los contratos de concesión
- 3) Respetar los contratos 9) NS 0) NR

27) ¿Y cree usted que debería investigarse las supuestas irregularidades cometidas en la privatización de empresas, o sería mejor no hacerlo?

- 1) Debería investigarse
- 2) No debería investigarse 9) NS 0) NR

28) ¿Qué cree que pasaría si el gobierno renegociara las condiciones de transferencia? El gobierno (como categoría general):

- 1) Perdería el respaldo de todo el sector empresario
- 2) Perdería el respaldo sólo de las empresas afectadas
- 3) No perdería respaldo empresario
- 4) Ganaría el respaldo de una parte del sector empresario, excluyendo a las empresas afectadas
- 9) NS 0) NR

29) Desde el punto de vista político, las privatizaciones pueden ser entendidas como una manera de sumar el apoyo de algunos sectores empresarios nacionales e internacionales al nuevo modelo económico ¿Cree usted que el mantenimiento del modelo a largo plazo depende de la fortaleza (v.g., lazos estrechos basados en intereses coincidentes) de la alianza entre el gobierno y esos sectores? Depende...

- 1) Mucho 2) Bastante 3) Algo 4) Poco 5) No depende nada 9) NS 0) NR

30) ¿Y en general usted cree que las normas regulatorias existentes para los servicios públicos privatizados son...?

- 1) Muy Buenas 2) Buenas 3) Regulares 4) Malas 5) Muy malas 9) NS 0) NR
-

31) ¿Cómo calificaría usted la actuación de los siguientes entes reguladores?

	1	2	3	4	5	9	0
a) CNC (Comisión Nacional de Comunicaciones)	1	2	3	4	5	9	0
b) ENRE (Ente Nacional Regulador de la Electricidad)	1	2	3	4	5	9	0
c) ENARGAS (Ente Nacional Regulador del Gas)	1	2	3	4	5	9	0
d) ETOSS (Agua en el AMBA)	1	2	3	4	5	9	0
e) CNRT (Comisión Nacional de Regulación del Transporte)	1	2	3	4	5	9	0
f) ORSNA (Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos)	1	2	3	4	5	9	0
g) OCCV (Organo de Control de las Concesiones viales)	1	2	3	4	5	9	0
h) Superintendencia de AFJP	1	2	3	4	5	9	0
i) Banco Central (Regulador de bancos)	1	2	3	4	5	9	0

32) Para cada uno de los siguientes factores nos gustaría que nos diga si le parece que dificultan mucho, bastante, algo, poco o nada el desempeño de los entes reguladores.

	1	2	3	4	5	9	0
a) Disponibilidad de recursos materiales	1	2	3	4	5	9	0
b) Disponibilidad de recursos humanos	1	2	3	4	5	9	0
c) Diseño institucional	1	2	3	4	5	9	0
d) Injerencia política	1	2	3	4	5	9	0
e) Dependencia económica de las empresas	1	2	3	4	5	9	0
f) Grado de concentración de la propiedad en el sector respectivo	1	2	3	4	5	9	0
g) Corrupción	1	2	3	4	5	9	0

33) ¿Y cuáles son los principales factores que determinan que un ente regulador sea autónomo o no?

- a) _____
- b) _____
- c) _____

34) ¿Qué capacidad de influencia efectiva (como capacidad de modificar las condiciones de la prestación)

tienen consumidores, clientes y usuarios en cuestiones que hacen a la defensa de sus intereses?

1) Mucha 2) Bastante 3) Alguna 4) Poca 5) Ninguna 9) NS 0) NR

35) ¿Cree que las organizaciones y asociaciones que los representan son muy, bastante, algo, poco o nada eficaces?

1) Muy eficaces 2) Bastante eficaces 3) Algo eficaces 4) Poco eficaces 5) Nada eficaces 9) NS 0) NR

36) ¿Cree que los derechos de los consumidores, clientes y usuarios están debidamente protegidos por la ley?

1) Muy bien protegidos 2) Bien protegidos 3) Regularmente protegidos 4) Mal protegidos
5) Muy mal protegidos 9) NS 0) NR

37) ¿Cómo podría incrementarse la participación de los consumidores, clientes y usuarios en la toma de decisiones que los afectan?

a) _____

b) _____

c) _____

38) ¿Usted cree que la seguridad jurídica es un factor muy, bastante, algo, poco o nada tenido en cuenta por los empresarios a la hora de tomar decisiones de inversión?

1) Muy tenido en cuenta 2) Bastante tenido en cuenta 3) Algo tenido en cuenta 4) Poco tenido en cuenta
5) Nada tenido en cuenta 9) NS 0) NR

39) Desde 1989 a la fecha se han efectuado un conjunto de reformas tributarias. ¿Cuál es su evaluación respecto de esas reformas en términos de...

	Muy buena	Buena	Regular	Mala	Muy mala	NS	NR
a) Mejoramiento de la administración tributaria?	1	2	3	4	5	9	0
b) Incremento de la capacidad fiscal del estado?	1	2	3	4	5	9	0
c) Simplificación del sistema impositivo?	1	2	3	4	5	9	0
d) Hacer más fácil y más barato el pago de impuestos	1	2	3	4	5	9	0

40) Desde 1989 a la fecha la AFIP-DGI ha invertido muchos recursos para incrementar su capacidad administrativa. ...¿Ud. cree que ..(a)? ¿y(b) y (c)?

	Mejorado Mucho	Mejorado algo	Ni mejorado ni empeorado	Empeorado algo	Empeorado mucho	NS	NR
a) La capacidad administrativa de la AFIP-DGI ha..	1	2	3	4	5	9	0
b) La atención a los contribuyentes ha....	1	2	3	4	5	9	0
c) La lucha contra la corrupción ha	1	2	3	4	5	9	0

41) ¿Con cuál de estas dos opiniones respecto del IVA, esta Ud. más de acuerdo?

- 1) La tasa actual del 21% debe ser reducida para disminuir la presión tributaria sobre el consumo.
 - 2) La tasa del 21% debe ser mantenida, por que el IVA es el impuesto de mayor recaudación y el más fácil de cobrar.
- 9) NS 0) NC

42) (Sólo para aquellos que eligieron la opción 1 en la anterior) ¿Y le parece que la reducción en el IVA debería financiarse....?

	í	o	No corresponde	NS	NR
a) Aumentando el impuesto a las ganancias de las Personas Físicas			8	9	0
b) Aumentando el impuesto a las ganancias de las empresas			8	9	0
c) Aumentando el impuesto a las propiedades (inmobiliario, autos, etc.)			8	9	0
d) Aumentando el impuesto al trabajo			8	9	0
e) Aumentando el impuesto a la renta presunta de las empresas					
f) Bajando gasto público					

43) Y si en caso de reducirse el gasto público se tuviera que disminuir alguno de los siguientes rubros del presupuesto nacional ¿cuáles recortaría en primer lugar? (indicar con un ranking de 1 a 7, aceptando la existencia de empates):

Ranking (Entregar tarjeta N° 2)

- a) Programas educativos _____
- b) Salud _____
- c) Jubilaciones _____
- d) Gastos reservados _____
- e) ATNs _____
- f) Viáticos _____
- g) Infraestructura _____

44) Le vamos a enumerar una serie de razones que se han propuesto para explicar el alto grado de evasión impositiva en el país, nos gustaría que nos diga si Ud. está muy, bastante, algo, poco o nada de acuerdo con cada una de ellas:

	Muy de acuerdo	Bastante de acuerdo	Algo de acuerdo	Poco de acuerdo	Nada de acuerdo	NS	NR
a) Nuestra cultura, que legitima la falta generalizada de respeto a la ley	1	2	3	4	5	9	0
b) El alto costo y la escasez de crédito en el mercado financiero	1	2	3	4	5	9	0
c) La falta de ejemplaridad: los que más evaden nunca tienen problemas	1	2	3	4	5	9	0
d) La percepción que tienen los contribuyentes de un clima de corrupción generalizada.	1	2	3	4	5	9	0
e) La percepción que tienen los contribuyentes de que la AFIP no tiene capacidad para detectar a los evasores	1	2	3	4	5	9	0
f) La percepción que tienen los contribuyentes de que la justicia es débil. Raramente castiga a los evasores.	1	2	3	4	5	9	0
g) La Ley Penal Tributaria, que no es efectiva	1	2	3	4	5	9	0

45) Le vamos a leer ahora una serie de medidas que se han propuesto para reducir la evasión. Nos gustaría que nos diga si le parece que su implementación sería muy, bastante, algo, poco o nada efectivas.

	Muy efectiva	Bastante efectiva	Algo efectiva	Poco efectiva	Nada efectiva	NS	NR
a) Simplificar el sistema tributario	1	2	3	4	5	9	0
b) Castigos ejemplares a evasores conocidos por la gente	1	2	3	4	5	9	0
c) Bajar la carga tributaria	1	2	3	4	5	9	0
d) Mejorar la eficiencia en el gasto público	1	2	3	4	5	9	0
e) Disminuir sensiblemente la corrupción	1	2	3	4	5	9	0
g) Bajar las tasas de interés que pagan los contribuyentes	1	2	3	4	5	9	0
g) Mejorar la capacidad de gestión de la AFIP	1	2	3	4	5	9	0
i) Hacer más eficiente el Poder judicial para incrementar la capacidad de sanción	1	2	3	4	5	9	0
j) Impulsar un cambio en la cultura tributaria desde el Estado	1	2	3	4	5	9	0

46) Está usted muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo con las siguientes frases:

a) “La tolerancia de la sociedad hacia la evasión tributaria está relacionada con la desconfianza que los argentinos tienen del Estado, generada durante décadas de ineficiencia, autoritarismo e inestabilidad económica y política”.

1) Muy de acuerdo 2) De acuerdo 3) En desacuerdo 3) Muy en desacuerdo 9) NS 0) NR

b) “La evasión es una especie de subsidio para muchos empresarios e individuos que tienen dificultades para acomodarse a los cambios económicos de la última década”

1) Muy de acuerdo 2) De acuerdo 3) En desacuerdo 3) Muy en desacuerdo 9) NS 0) NR

c) “Para disminuir significativamente la evasión tributaria es necesario ‘blanquear’ la economía informal”

1) Muy de acuerdo 2) De acuerdo 3) En desacuerdo 3) Muy en desacuerdo 9) NS 0) NR

47) ¿Cree que, en general, los partidos políticos están muy, bastante, algo, poco o nada comprometidos con la lucha contra la evasión?

- 1) Muy comprometidos 2) Bastante comprometidos 3) Al comprometidos 4) Poco comprometidos
 5) Nada comprometidos 9) NS 0) NR

48) Hay una vieja máxima que dice "no puede haber impuestos sin mecanismos efectivos de representación política". ¿Cree Ud. que la conducta tributaria de los argentinos mejoraría mucho, bastante, algo, poco o nada si:

	Mejoraría mucho	Mejoraría bastante	Mejoraría algo	Mejoraría poco	No mejoraría nada	NS	NR
a) Cambiara el sistema electoral, eliminando las listas sábana	1	2	3	4	5	9	0
b) La gente supiera mejor en qué se gasta el dinero del presupuesto	1	2	3	4	5	9	0
c) Se redujera considerablemente el clientelismo político	1	2	3	4	5	9	0
d) Se diera más participación a los ciudadanos en la distribución de los recursos fiscales	1	2	3	4	5	9	0

Para terminar.

49) ¿A qué partido político argentino se siente usted más cercano?

- 1) PJ 2) UCR 3) FREPASO 4) AR 5) Alianza
 6) Otros (aclarar): _____ 7) Ninguno 9) No sabe 0) No responde

50) ¿Hay algo más que le gustaría agregar sobre los contenidos de esta encuesta?

Datos Clasificación:

51) Sexo: 1) Masculino 2) Femenino

52) Ciudad y año de nacimiento: _____ (aclarar provincia y/o país); 19__

53) Ciudad de residencia habitual: _____ (aclarar provincia y/o país)

54) Ciudad de trabajo habitual: _____ (aclarar provincia y/o país)

55) ¿Cuál es su nacionalidad (si tiene más de una, listar en el orden que indique el encuestado)

a. _____ b. _____ c. _____

56) ¿Cuál es el máximo nivel educativo que usted ha alcanzado? ¿Y cuál fue el máximo nivel educativo alcanzado por su padre y su madre (o tutores)?

	Entrevistado	Padre (o tutor)	Madre (o tutorā)
Ninguno	1	1	1
Primario incompleto	2	2	2
Primario completo	3	3	3
Secundario incompleto	4	4	4
Secundario completo	5	5	5
Terciario incompleto	6	6	6
Terciario completo	7	7	7
Universitario incompleto	8	8	8
Universitario completo	9	9	9
Posgrado incompleto	10	10	10
Posgrado/especialización completo	11	11	11
Maestría completa	12	12	12
Doctorado completo	13	13	13
No sabe	99	99	99
No responde	0	0	0

57) (En caso de que tenga educación universitaria de grado o posgrado)

¿Y en qué áreas o disciplinas cursó usted estudios universitarios de grado y posgrado?

a) Universitarios: 1. _____ 2.

b) Posgrado: 1. _____ 2.

58) ¿Considerando sólo su actividad principal, podría enumerarnos sus 3 cargos u ocupaciones anteriores a la actual?

Cargo/función	Institución (detallar si no es conocida)	Años en el cargo
a) _____	_____	_____
_____	_____	_____

b) _____

c) _____

59) ¿Podría decirnos cuántos años ha trabajado usted en el AMBA (de Campana a La Plata) y cuántos años en el interior del país?

a) AMBA: _____ Años

b) Interior: _____ Años

60) ¿Ha vivido usted en el exterior (al menos dos meses)? 1) Sí 2) No (saltar próxima pregunta) 9) NS 0) NR

61) **(Sólo si contesto si en la pregunta anterior y ordenados del que vivió más al que vivió menos)** ¿Podría decirnos en qué países, aproximadamente qué cantidad de tiempo y el motivo de su residencia en cada uno de ellos?

	Años	Meses	Motivo
a) País 1:	_____	_____	_____
b) País 2:	_____	_____	_____
c) País 3:	_____	_____	_____
d) País 4:	_____	_____	_____
e) País 5:	_____	_____	_____

62) ¿Autoriza usted la publicación de su nombre **(y organización si corresponde)** en la lista que se publicará en un apéndice del libro?

- a) Nombre del entrevistado: 1) Si 2) No
b) Nombre de la organización: 1) Si 2) No

Anexo II: Variables generadas

Se entiende por variables generadas aquéllas que no aparecen en el cuestionario pero que sí están en la base de datos. La mayoría provienen de la recodificación de las categorías de una pregunta o de la combinación de dos o más preguntas.

Nombre, origen, contenido y categorías de las variables generadas

Variable	Basada en	Contenido	Categorías
Pondera	Decisión de los investigadores	Factores de ponderación para que cada sector y subsector de la muestra tenga el peso asignado a priori por los investigadores	Factor de ponderación mínimo = 0,722 (PJM); Factor de ponderación máximo = 1,733 (líderes sindicales). Los demás factores de ponderación pueden consultarse en la base de datos.
Mes	Variable "fecha"	Recodificación de la fecha de la entrevista en 4 meses	4: Junio, julio, agosto y septiembre
Sector	Decisión de los investigadores	Calsificación de distintos tipos de líderes realizada por los responsables de la investigación	7: Líderes políticos, empresariales, sindicales, intelectuales, religiosos, sociales y externos
Subsector	Decisión de los investigadores	Calsificación de distintos subtipos de líderes al interior de cada sector realizada por los responsables de la investigación	19: Líderes partidarios, PEN, líderes provinciales y municipales, legisladores nacionales, PJN; empresarios, banqueros, AFJPs y seguros; Centrales sindicales, secretarios generales de sindicatos; consultores, intelectuales influyentes; obispos; asociaciones de consumidores, de derechos humanos, de derechos ciudadanos, colegios profesionales, cámaras empresarias; organismos internacionales.
Sector5	Decisión de los investigadores	Recodificación en 5 categorías de la variable "sector", uniendo líderes intelectuales con externos y sociales con religiosos	5: Políticos y gobernantes, empresarios, sindicalistas, técnicos y sociedad civil.
Subsec13	Decisión de los investigadores	Recodificación en 13 categorías de la variable "subsector", desagregando sólo a los líderes políticos y empresarios	13: Líderes partidarios, PEN, líderes provinciales y municipales, legisladores nacionales, PJN; empresarios, banqueros, AFJPs y seguros; sindicales, intelectuales, religiosos, sociales y externos

Variable	Basada en	Contenido	Categorías
Edad	Variable "año de nacimiento" (p52b)	Cálculo de la edad de los entrevistados a partir de la fórmula 1999-Año de nacimiento	De 30 a 82
Edad5	Variable "edad"	Recodificación de la variable "edad" en 5 segmentos	5: 30 a 39, 40 a 49, 50 a 59, 60 a 69 y 70 y más.
Educa4	Variable "nivel educativo" (p56a)	Recodificación de la variable "nivel educativo" en 4 categorías	4: hasta secundario completo, hasta universitario incompleto (incluyendo terciario), universitario completo y posgrado
Anostrab	VARIABLES "años de trabajo en el sector público" y "en el sector privado" (1a y 1b)	Suma de la cantidad de años trabajados en el sector público y en el sector privado	0 a 70 años
Anospub	VARIABLES 1a y "anostrab"	Porcentaje del total de años que trabajó en los sectores público y privado trabajados en el sector público, o $(1a/anostrab)*100$	de 0% a 100%
Anospriv	VARIABLES 1b y "anostrab"	Porcentaje del total de años que trabajó en los sectores público y privado trabajados en el sector privado, o $(1b/anostrab)*100$	de 0% a 100%
Sectraba	Variable "anospub"	Recodificación de la variable "anospub" en 5 categorías	5: Trabajó sólo en el sector privado, mayormente en el sector privado, en ambos, mayormente en el sector público y sólo en el sector público.
Hsadmpu b	Variable 3	Recodificación de la variable 3 (horas semanales dedicadas a relacionarse con la administración pública) en 6 categorías	6: 0 a 2 hs.; 2 a 5 hs.; 5 a 10 hs.; 10 a 20 hs.; 20 a 40 hs.; 40 a 80 hs.
Trabinte	Variable 59b	Recodificación de la variable 59b (años de trabajo en el interior del país) en 4 categorías	4: 0 años; 1 a 10 años; 11 a 20 años y 20 años y más.

Variable	Basada en	Contenido	Categorías
Añosexte	Variable 61	Sumatoria de las variables p61a2rec, p61b2rec, p61c2rec y p61d2rec (años vividos en el exterior recodificada)	De 0 a 41,5 años.
Añosex5	Variable "añosexte"	Recodificación de la variable "añosexte" en 5 categorías	5: No vivió en el exterior, hasta 1 año en el exterior, de 1 a 3 años, de 3 a 10 años, más de 10 años.
Sumat10	Variabes 10a a 10i	Sumatoria de los scores de las variables 10a a 10i (responsabilidades del estado y el sector privado)	15 a 39
Divis10	Variabes 10a a 10i	Cantidad de ítems en la pregunta 10 efectivamente contestados (sin Ns o Nr)	1, 8 y 9.
Indpriva (IEP)	Variabes "sumat10" y "divis10"	Índice de estatismo-privatismo. División de "sumat10" sobre "divis10".	De 1,667 a 4,333 (rango teórico de 1 a 5).
Indpriv5 (IEP en 5 categorías)	Variable "indpriva"	Índice de estatismo-privatismo recodificado en 5 categorías	5: Muy estatistas (hasta 2,333), estatistas (hasta 2,889), intermedios (hasta 3,375), privatistas (hasta 3,778) y muy privatistas (hasta 4,333)
Sumat14	Variabes 14a a 14j	Sumatoria de los scores de las variables 14a a 14j (desempeño del estado argentino en 10 áreas)	19 a 47
Divis14	Variabes 14a a 14j	Cantidad de ítems en la pregunta 14 efectivamente contestados (sin Ns o Nr)	7, 8, 9, 10.
Inddesem (IDE)	Variabes "sumat14" y "divis14"	Índice de desempeño estatal. División de "sumat14" sobre "divis14" (con escala invertida: 5=1 y 1=5).	De 1,3 a 3,9 (rango teórico de 1 a 5).
Inddese5 (IDE en 5 categorías)	Variable "inddesem"	Índice de desempeño estatal recodificado en 5 categorías	5: Muy malo (hasta 2,0), malo (hasta 2,4), regular (hasta 3,0), pbueno (hasta 3,4) y muy bueno (hasta 3,9)